

En la Villa de Peñacerrada-Urizaharra, y en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las diecinueve horas treinta minutos del día **SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO**, se reunió esta Corporación Municipal para celebrar **SESIÓN ORDINARIA DE PLENO**, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Juan José Betolaza Pinedo, asistiendo los concejales: D. José Luis Armentia Gainzaráin, Dña. Silvia Quintas Barrón, D. Ricardo Sáez Ibisate, D. Luis Montoya Campo, Dña. Raquel Cerio Salazar y D. Enrique González Gutiérrez.

Y todos ellos asistidos de la Secretaria Municipal Dña. Amalia García Zulaica.

La Concejala del grupo municipal Agrupación Municipal Independiente-A.M.I. Dña. Silvia Quintas Barrón, abandona el Salón de Plenos durante el debate del 7º punto del orden del día de la sesión.

Declarado abierto el acto por la presidencia, se pasaron a tratar los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión.

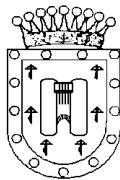
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA CON FECHA 5 DE JULIO DE 2018.

Visto y examinado el contenido del acta de la sesión celebrada con fecha 5 de julio de 2018, los Concejales asistentes (todos los que, por derecho, integran la Corporación), por UNANIMIDAD, muestran su conformidad y aprobación al contenido de la misma.

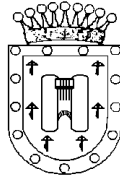
SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DICTADAS DESDE LA CELEBRACIÓN DE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO.

Por la Secretaria se procede a la lectura de las Resoluciones dictadas desde la celebración de la última sesión ordinaria de Pleno, siendo éstas las que a continuación se relacionan:

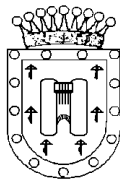
- .- Resolución nº 73/2018, de 2 de julio, por la que se impone una 5ª multa coercitiva por importe de 600,00 € ante el incumplimiento de orden de restauración de la legalidad urbanística referente al edificio sito en parcela 58 del polígono 2 de Peñacerrada declarado en situación de ruina.
- .- Resolución nº 74/2018, de 12 de julio, por la que se concede licencia de obras para el pintado de fachada de la edificación sita en calle Arco nº 3 de la localidad de Peñacerrada.



- .- Resolución nº 75/2018, de 12 de julio, por la que se concede a la Junta Administrativa de Peñacerrada, licencia de obras para reparar la red de saneamiento de aguas pluviales en la calle Concejo nº 1 de la localidad.
- .- Resolución nº 76/2018, de 12 de julio, por la que se concede a la Junta Administrativa de Faido, licencia de obras para instalar cubre-contenedores en la calle Prado nº 1 de la localidad.
- .- Resolución nº 77/2018, de 12 de julio, por la que se concede a la Junta Administrativa de Faido, licencia para ejecutar obras de reforma y ampliación de zona de juegos en la plaza de la Iglesia de la localidad.
- .- Resolución nº 78/2018, de 12 de julio, por la que se deniega la licencia solicitada por la Junta Administrativa de Baroja para la ejecución de obras de arreglo de camino de acceso a la fosa séptica de la localidad en tanto no se disponga de la autorización del Organismo de Cuenca.
- .- Resolución nº 79/2018, de 12 de julio, por la que se concede licencia para ejecutar obras de acondicionamiento de camino privado localizado en la parcela de referencia catastral nº 620B del polígono 1 de la localidad de Faido.
- .- Resolución nº 80/2018, de 12 de julio, por la que se deja sin efecto la licencia concedida por Resolución de Alcaldía nº 28/2018, de 8 de marzo, conforme a la petición cursada por la solicitante con fecha 18 de mayo de 2018 y en base a la nueva documentación aportada con esa misma fecha, se concede nueva licencia municipal para segregar una porción de 42,86 m² de la parcela rústica 1112 del polígono 1 de Peñacerrada y su posterior agrupación a parcela urbana 645 del polígono 1 de la localidad de Faido.
- .- Resolución nº 81/2018, de 13 de julio, por la que se aprueba la relación contable de Obligaciones y Propuestas de Mandamiento de Pago nº O/2018/9 de fecha 13 de julio, cuyo importe asciende a 6.597,13 €.
- .- Resolución nº 82/2018, de 3 de agosto, por la que se aprueba la relación contable de Obligaciones y Propuestas de Mandamiento de Pago nº O/2018/10 de fecha 3 de agosto, cuyo importe asciende a 6.525,60 €.
- .- Resolución nº 83/2018, de 3 de agosto, por la que se concede licencia para ejecutar obras de construcción de porche en fachada norte de edificación localizada en la calle San Miguel s/nº del polígono 1 de la localidad de Montoria.
- .- Resolución nº 84/2018, de 3 de agosto, por la que se concede licencia para ejecutar obras de reparación de defectos en edificación sita en la calle Prado nº 10 de la localidad de Faido.
- .- Resolución nº 85/2018, de 3 de agosto, por la que se concede licencia para ejecutar obras de pintado de fachada de edificio sito en la calle Real nº 14 de la localidad de Montoria.
- .- Resolución nº 86/2018, de 6 de agosto, por la que se autoriza el uso de la sala de musculación ubicada en el centro multiusos municipal.



- .- Resolución nº 87/2018, de 6 de agosto, por la que se deniega la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica solicitada en relación al vehículo matrícula R6840BBP por no reunir los requisitos exigidos para su obtención.
- .- Resolución nº 88/2018, de 10 de agosto, por la que se reconoce el derecho a la devolución parcial del importe ingresado en concepto de IVTM 2017 como consecuencia de la baja definitiva del vehículo con matrícula 0882BLH.
- .- Resolución nº 89/2018, de 10 de agosto, por la que se reconoce el derecho a la devolución parcial del importe ingresado en concepto de IVTM 2018 como consecuencia de la baja definitiva del vehículo con matrícula VI-9940-K.
- .- Resolución nº 90/2018, de 10 de agosto, por la que se reconoce el derecho a la devolución parcial del importe ingresado en concepto de IVTM 2018 como consecuencia de la baja definitiva del vehículo con matrícula 1854BYV.
- .- Resolución nº 91/2018, de 13 de agosto, por la que se solicita a la persona representante del colectivo que ha desarrollado un programa de manualidades en el centro multiusos municipal durante el pasado curso, el ingreso de la cantidad correspondiente en concepto de uso de sala.
- .- Resolución nº 92/2018, de 13 de agosto, por la que se solicita a la persona representante del colectivo que ha desarrollado un programa de estiramientos en el centro multiusos municipal durante el pasado curso, el ingreso de la cantidad correspondiente en concepto de uso de sala.
- .- Resolución nº 93/2018, de 13 de agosto, por la que se solicita a la persona representante del colectivo que ha desarrollado un programa de pilates en el centro multiusos municipal durante el pasado curso, el ingreso de la cantidad correspondiente en concepto de uso de sala.
- .- Resolución nº 94/2018, de 13 de agosto, por la que se solicita a la persona representante del colectivo que ha desarrollado un programa de Euskal Dantzak en el centro multiusos municipal durante el pasado curso, el ingreso de la cantidad correspondiente en concepto de uso de sala.
- .- Resolución nº 95/2018, de 14 de agosto, por la que se aprueban las transferencias financieras a las Juntas Administrativas de Baroja, Faido, Loza, Montoria y Payueta y se ordena el abono de las mismas.
- .- Resolución nº 96/2018, de 14 de agosto, por la que se reconoce el derecho a la devolución parcial del importe ingresado en concepto de IVTM 2018 como consecuencia de la baja del vehículo matrícula VI-2971-L.
- .- Resolución nº 97/2018, de 14 de agosto, por la que se reconoce el derecho a la devolución parcial del importe ingresado en concepto de IVTM 2018 como consecuencia de la baja del vehículo matrícula CA-8211-AV.
- .- Resolución nº 98/2018, de 4 de septiembre, por la que se convoca sesión ordinaria de la Comisión Informativa para el día de hoy.
- .- Resolución nº 99/2018, de 4 de septiembre, por la que se convoca sesión ordinaria del Pleno de la Corporación para el día de hoy.



.- Resolución nº 100/2018, de 6 de septiembre, por la que se requiere la inmediata retirada (en un plazo de 24 horas) de tejas y restos de cubierta que presentan riesgo de caída en edificación sita en parcela de referencia catastral nº 32 del polígono 2 de Peñacerrada y se concede un plazo de quince días para que presenten alegaciones o la documentación que consideren oportuna, poniendo en su conocimiento que deberán realizar las obras de reparación y mantenimiento necesarias para garantizar la estabilidad y puesta en servicio de la cubierta. Si fuera necesario conforme a lo previsto en la Ley de Ordenación de la Edificación, se presentará proyecto visado, redactado por técnico competente.

TERCERO.- ALEGACIÓN AL ANTEPROYECTO DE ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN O REVISIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE CARRETERAS DE ÁLAVA 2004-2015, PARA EL PERIODO 2016-2027.

Visto el acuerdo 334/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 19 de junio, por el que se aprueba el Anteproyecto de la Actualización, Modificación o Revisión del Plan Integral de Carreteras de Álava 2004-2015, para el periodo 2016-2027 publicado en el BOTHA nº 76, de 2 de julio de 2018,

Resultando que, tras el estudio del documento, este Ayuntamiento considera que las determinaciones contenidas en el mismo inciden negativamente en lo referido a las limitaciones (prohibiciones) que se imponen para los usos y construcciones ubicados en los suelos clasificados como urbanos y urbanizables de nuestro municipio, así como en su sometimiento a las autorizaciones de los mismos por parte del Departamento Foral de Infraestructuras Viarias y Movilidad de la Diputación Foral de Álava.

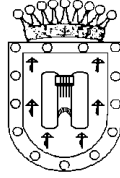
Resultando que el Anteproyecto de la Actualización, Modificación o Revisión del Plan Integral de Carreteras de Álava 2004-2015, para el periodo 2016-2027, se encuentra en trámite de información pública hasta el día 21 de septiembre de los corrientes,

Considerando lo dispuesto en el art. 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

Considerando el dictamen de la Comisión Informativa celebrada en el día de hoy con anterioridad,

El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de los Corporativos asistentes al acto (todos los que, por derecho, integran la Corporación), ACUERDA:

Primero.- Formular, ante el Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad de la Diputación Foral de Álava, las siguientes alegaciones:



Primera.- El anteproyecto de PICA incumple las previsiones de la Norma Foral de Carreteras de ÁLAVA 20/1990 de 25 de junio en lo que respecta a la LÍNEA DE EDIFICACIÓN.

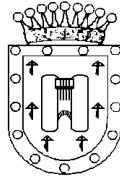
Llama la atención la reiterada referencia que el anteproyecto de Plan Integral realiza a favor del Reglamento General de Carreteras, especialmente en cuanto a la definición y delimitación de la Línea de Edificación, obviando la expresa previsión del artículo 42 de la Norma foral 20/1990 de 25 de junio (B.O.T.H.A. número 78) que autoriza a la Diputación Foral para la determinación de una Línea de Edificación más estrecha de la de 50 metros (autovías, autopistas y vías rápidas) o de 25 metros (resto de carreteras) atendiendo, precisamente, a la realidad física y funcional de cada tramo urbano o urbanizable, con independencia que su clasificación en una o en ambas márgenes del mismo.

La línea de Edificación, como bien saben, conlleva la prohibición absoluta de cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, contradiciendo, abiertamente, la realidad de los hechos constituida por edificaciones en muchos casos muy anteriores a la normativa de carreteras; hurtando a los municipios sus potestades y competencias urbanísticas y vulnerando los legítimos derechos de los propietarios y propietarias de las citadas construcciones. Las líneas de edificación planteadas para los suelos clasificados urbanísticamente como suelos urbanos consolidados, resultan claramente inviables y con ello, fuente continua de conflicto. Lo mismo acaece con la mayoría de los suelos urbanos no consolidados y urbanizables ya sean residenciales, terciarios, industriales o de cualquier otra calificación.

Postulamos que los citados suelos urbanos y urbanizables conlleven un tratamiento propio, adecuado y ajustado a cada uno de los supuestos, a través de un procedimiento distinto al de la aprobación del Plan Integral de Carreteras que consideramos jurídicamente inadecuado para tal determinación (artículo 42 de la Norma Foral 20/1990), y sobre todo, respetuoso con las potestades y competencias urbanísticas municipales y los derechos de las personas afectadas.

Segunda.- Ausencia u omisión del “Estudio de incidencia sobre el planeamiento urbanístico” exigido por el artículo 14 de la Norma Foral 20/1990 de Carreteras de ÁLAVA.

Por otra parte, ya sea en coherencia con lo indicado en el apartado anterior de este escrito, detectamos una omisión más que relevante en la documentación expuesta al público, cual es la del “Estudio de incidencia sobre el planeamiento urbanístico” que el Plan Integral de Carreteras tiene sobre los instrumentos de ordenación urbanística (artículo 14 de la Norma Foral 20/1990 de 25 de junio de Carreteras de ÁLAVA).



Evidentemente, máxime cuando se pretende una naturaleza vinculante del Plan Integral (Plan Sectorial), lo que resulta también discutible al menos en algunos aspectos, el estudio detallado de la ordenación urbanística vigente y el análisis y descripción de su incidencia sobre los mismos resulta sustancial e ineludible. Su omisión constituye clara causa de nulidad de la aprobación misma del Plan. Se desconoce, por ejemplo, qué suelos clasificados como urbanos y con parámetros urbanísticos en vigor, habrán de renunciar a su desarrollo por causa de este Plan Integral. No se han evaluado económicamente las causas de tales implicaciones obviamente, porque las mismas no han sido relacionadas ni estudiadas. Debería por ello, revocarse la aprobación inicial del anteproyecto y revisarse el mismo con la incorporación de todos los datos e instrumentos precisos como garantía de su acierto.

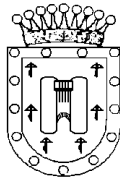
A mayor abundamiento, nos encontramos con que el anteproyecto de Plan Integral regula incluso usos urbanísticos (como el caso del apéndice 1 en el que ubica sistemas locales y usos posibles en los márgenes) ajenos a la competencia sectorial de carreteras alcanzando a incorporar una nueva línea (línea de cierre de parcela) inexistente en la Norma Foral 20/1990 de Carreteras de ÁLAVA y claramente lesiva y gravosa para la propiedad colindante. Insistimos en que deberían analizarse todas estas implicaciones y la legalidad misma de las determinaciones.

Tercera.- La intervención del Departamento Foral en las construcciones, instalaciones y usos en suelos urbanos y urbanizables.

Asimismo, y atendiendo a lo ya señalado respecto de la Línea de Edificación, las propuestas del anteproyecto de Plan Integral van acompañadas de una directa y previa autorización necesaria por parte del Departamento Foral de Infraestructuras Viarias y Movilidad que, también ejercerá las labores de vigilancia, inspección y disciplina sobre las mismas.

En los términos que se plantea, excesivos a la luz de la realidad y de la propia Norma Foral 20/1990 de Carreteras de ÁLAVA, y teniendo en cuenta el modo y amplitud de la mencionada Línea de Edificación, consideramos que tal intervención foral, sobre todo en suelos urbanos consolidados, resulta a todas luces asfixiante e irrealizable en la práctica. No es viable que cada vez que alguien desee arreglar una fachada e incluso ampliar alguna edificación en suelo consolidado, tenga que obtener la previa autorización foral para luego recibir la licencia municipal.

En la práctica totalidad de los municipios de ÁLAVA, el planeamiento general lo aprueba la Diputación Foral conforme a la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo. Quizás es este el momento de coordinar la fijación de la línea de edificación e incluso de prever que sea el Municipio el que controle su cumplimiento a través de su licencia urbanística. Lo mismo cabe señalar respecto del planeamiento de ordenación pormenorizada.



Pensamos y postulamos que la realidad de nuestros Pueblos ha de prevalecer sobre previsiones de un anteproyecto de Plan que, con todos los respetos, caso de aprobarse en los términos actuales, resultará lesivo para nuestros municipios.

Segundo.- Solicitar al Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad de la Diputación Foral de Álava deje sin efecto el anteproyecto inicialmente aprobado, revisándose el mismo de conformidad con lo indicado en las anteriores alegaciones, reformulándose con la previa y estrecha colaboración de las administraciones municipales afectadas en atención a la realidad de los hechos y al respeto competencial que asiste a los municipios y concejos.

CUARTO.- APROBACIÓN DE LA 3ª CERTIFICACIÓN – LIQUIDACIÓN Y FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LOS 4 PEQUEÑOS ALMACENES DIFERENCIADOS UBICADO EN LA PARCELA DE REFERENCIA CATASTRAL Nº 137, DEL POLÍGONO Nº 12 EN LA LOCALIDAD DE PEÑACERRADA.

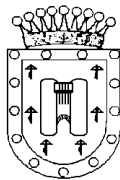
Visto el contrato adjudicado por el Pleno de la Corporación a la mercantil Carlos Santamaría, S.L., con fecha 27 de diciembre de 2017, que tiene por objeto la realización de obras de acondicionamiento exterior del edificio que alberga los 4 pequeños almacenes diferenciados, ubicado en la parcela de referencia catastral nº 137, del polígono nº 2 en la localidad de Peñacerrada,

Resultando que las obras fueron adjudicadas por un importe total de 36.425,83 € (IVA inc.),

Resultando que con fecha 30 de julio de 2018 (registro de entrada nº 700), tiene entrada en este Ayuntamiento la factura emitida por Carlos Santamaría, S.L. con el número 18/00/629, de fecha 20 de julio, correspondiente a la 3ª certificación-liquidación de las obras anteriormente referenciadas de la misma fecha, 20 de julio de 2018 (documento obrante en el expediente), por importe de 11.436,35 €, correspondiendo al IVA 1.984,82 euros y a la base imponible 9.451,53 euros.

Resultando que, conforme a la documentación aportada, la ejecución de la obra ha ascendido a un total de 37.369,86 € (IVA inc.), lo que supone un incremento de 944,03 € respecto al importe de adjudicación,

Resultando que el Arquitecto Asesor Municipal, en informe emitido con fecha 3 de agosto de 2018, informa favorablemente la liquidación de obra presentada, justificando el incremento en el coste en un aumento de la medición de obra ejecutada,



Resultando que con fecha 25 de julio de 2018 (registro de entrada nº 692), se recibe en este Ayuntamiento comunicación relativa a cesión de factura a entidad bancaria conforme a lo estipulado en el art. 347 del Código de Comercio,

Resultando que ha sido tramitado el correspondiente expediente de gasto y existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente a nivel de vinculación en el presupuesto vigente para dar cobertura al reconocimiento de la presente obligación y existe conformidad con la misma,

Examinados los documentos presentados, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

Considerando el dictamen de la comisión informativa celebrada ese mismo día, con anterioridad,

El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de los Corporativos asistentes al acto (todos los que, por derecho, integran la Corporación), ACUERDA:

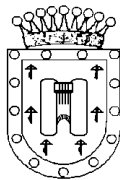
Primero.- Aprobar la 3ª certificación-liquidación de las obras de “Acondicionamiento Exterior del edificio que alberga los 4 pequeños almacenes diferenciados, ubicado en la parcela de referencia catastral nº 137, del polígono nº 2 en la localidad de Peñacerrada”, de fecha 19 de julio, por importe de 11.436,35 €, correspondiendo al IVA 1.984,82 euros y a la base imponible 9.451,53 euros.

Segundo.- Aprobar la factura nº 18/00/629, emitida por la mercantil Carlos Santamaría, S.L. con fecha 20 de julio de 2018 por importe de 11.436,35 € (IVA inc.), correspondiente a la certificación anteriormente señalada.

Tercero.- Proceder al abono de la factura anterior a la entidad financiera titular del derecho de cobro.

Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil Carlos Santamaría, S.L., para su conocimiento y a los efectos pertinentes.

QUINTO.- PRÓRROGA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA VIVIENDA Y SOLAR DENOMINADO “CASA MÉDICO”.



Visto el contrato de arrendamiento formalizado con fecha 12 de agosto de 2013 entre D. Andoni Bravo Vega y este Ayuntamiento, referente al inmueble vivienda y solar de propiedad municipal denominado “Casa Médico”, sito en Avenida Urizaharra nº 31 de la localidad de Peñacerrada (parcela de referencia catastral nº 915, polígono 1),

Resultando que conforme dispone la cláusula 4ª del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que rigen el citado contrato, su duración quedaba fijada en *“4 años, de carácter prorrogable, por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, su voluntad de no renovarlo, conforme al artículo 9 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos”*,

Resultando que el plazo de cinco años de duración mínima del contrato al que se refiere la cláusula mencionada concluyó el pasado día 12 de agosto de 2018,

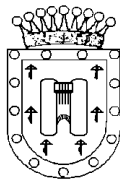
Considerando que, según dispone el art. 10.1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, *“Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos como mínimo tres años de duración de aquel, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con treinta días de antelación a aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará necesariamente durante un año más.”*

Considerando el dictamen de la comisión informativa celebrada ese mismo día, con anterioridad,

El Pleno de la Corporación, por MAYORÍA ABSOLUTA DEL NÚMERO LEGAL DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN (6 de los 7 Concejales que, por derecho la integran, con la abstención de la concejala del grupo municipal Agrupación Municipal Independiente-A.M.I., Dña. Silvia Quintas Barrón, por tener interés personal en el asunto), ACUERDA:

Primero.- Acordar una última e improrrogable prórroga por el plazo de un año del contrato de arrendamiento del inmueble vivienda y solar de propiedad municipal denominado antigua “Casa Médico”, sito en Avenida Urizaharra nº 31 de la localidad de Peñacerrada (parcela de referencia catastral nº 915, polígono 1), formalizado entre D. Andoni Bravo Vega y este Ayuntamiento con fecha 12 de agosto de 2013, concluyendo la vigencia completa del mismo el día 12 de agosto de 2019.

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios en ejecución del presente acuerdo.



Tercero.- Comunicar al Sr. Andoni Bravo Vega la adopción del presente acuerdo para su conocimiento y a los efectos pertinentes.

SEXTO.- PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA VASCA DEL AGUA Y EL AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA-URIZAHARRA PARA INTERVENIR CONJUNTAMENTE EN LOS CAUCES Y MÁRGENES DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.

El Alcalde propone dejar el asunto sobre la mesa, propuesta que es aceptada por UNANIMIDAD de los Corporativos asistentes al acto.

SÉPTIMO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA FINANCIACIÓN DE LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PEÑACERRADA-URIZAHARRA.

El Concejal del grupo municipal EAJ-PNV, D. Enrique González Gutiérrez, propone repartir entre las juntas administrativas que cumplan las obligaciones estipuladas en la ordenanza, la cuota fija de aquéllas entidades que no presenten la documentación en plazo.

Se propone además, la modificación del texto de la ordenanza actualmente en vigor para, entre otras consideraciones, establecer un único documento de aportación obligatoria al objeto de optar a la financiación regulada en la misma.

Durante el debate de este punto del orden del día, la Concejala del grupo municipal Agrupación Municipal Independiente-A.M.I., Dña. Silvia Quintas Barrón, abandona el salón de Plenos.

Se plantean las siguientes,

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN

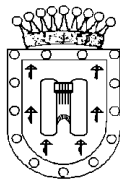
El art. 2º:

Artículo 2. Definiciones

Se entiende por financiación, a los efectos de esta ordenanza, las aportaciones del ayuntamiento a dichas entidades locales menores que contribuyan a sufragar los gastos corrientes derivados del ejercicio de actividades en el ámbito propio de sus competencias.

Pasaría a tener la siguiente redacción:

Artículo 2. Carácter de las aportaciones



Las cantidades que, en aplicación de la presente ordenanza perciban las juntas administrativas del municipio de Peñacerrada-Uribe, constituyen un ingreso ordinario de sus respectivas haciendas, de libre disposición y no condicionadas, para el sostenimiento y prestación de los servicios que, conforme a la normativa que las regula, les corresponden, así como para financiar los gastos corrientes de organización y gestión del propio concejo.

El art. 4º :

Artículo 4. Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios estarán sujetos a las siguientes obligaciones:

Primero: los órganos de gobierno de las entidades locales menores deberán estar legalmente constituidos.

Segundo: el/la regidor/a presidente/a de cada junta administrativa o persona que designe, deberá presentar en la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Peñacerrada-Uribe, con anterioridad al 30 de septiembre del año siguiente, el balance general de cuentas de la junta administrativa, con los ingresos y gastos correspondientes a cada ejercicio.

Tercero: los beneficiarios deberán someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que el ayuntamiento pueda realizar.

Pasaría a tener la siguiente redacción:

Artículo 4. Obligaciones de los beneficiarios

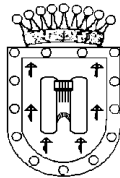
Los beneficiarios estarán sujetos a las siguientes obligaciones:

Primero: los órganos de gobierno de las entidades locales menores deberán estar legalmente constituidos.

Segundo: el/la regidor/a presidente/a de cada junta administrativa o persona que designe, deberá presentar en la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Peñacerrada-Uribe, con anterioridad al 30 de septiembre del año siguiente al que se refieran, o en la fecha en la que se establezca reglamentariamente, las cuentas anuales de su concejo (gastos, ingresos y existencias en caja) debidamente aprobadas en el formato exigido por la Diputación Foral de Álava, con acreditación del registro de entrada en el ente foral.

Tercero: los beneficiarios deberán someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que el ayuntamiento pueda realizar.

El art. 5:



Artículo 5. Obligaciones del ayuntamiento

El ayuntamiento estará sujeto a las siguientes obligaciones:

Primero: el ayuntamiento dotará anualmente en sus presupuestos, una o varias partidas presupuestarias, en concepto, bien de transferencias corrientes y/o de transferencias de capital, para contribuir a financiar los gastos en los que incurran dichas entidades en los términos establecidos en la presente ordenanza.

Segundo: el ayuntamiento realizará las transferencias en una única aportación antes del 31 de julio de cada ejercicio, siempre que éstas hayan cumplido las obligaciones señaladas en esta ordenanza.

Pasaría a tener la siguiente redacción:

Artículo 5. Obligaciones del ayuntamiento

El ayuntamiento estará sujeto a las siguientes obligaciones:

Primero: el ayuntamiento dotará anualmente en sus presupuestos, una partida presupuestaria en concepto de transferencias corrientes para contribuir a financiar los gastos en los que incurran dichas entidades en los términos establecidos en la presente ordenanza.

Segundo: el ayuntamiento realizará las transferencias en una única aportación antes del 31 de octubre de cada ejercicio, siempre que éstas hayan cumplido las obligaciones señaladas en el artículo 4º de esta ordenanza.

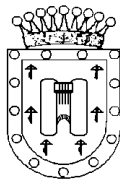
Tercero: con carácter excepcional, en caso de que alguna junta administrativa incumpla las obligaciones establecidas en el art. 4º de la presente ordenanza, el Ayuntamiento procederá al reparto del importe que le pudiera corresponder en concepto de cantidad fija (700,00 €), entre todas aquéllas entidades cuyos órganos de gobierno estén legalmente constituidos y que hayan presentado la documentación exigida en plazo. La cuantía que por este concepto pudiera corresponder será igual para todas las juntas administrativas que opten a este reparto excepcional.

El artículo 8:

Artículo 8. Sanciones

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en esta ordenanza dará lugar a la no percepción de la financiación anual que corresponda.

La sanción permanecerá en vigor en tanto no se cumplan dichas obligaciones.



En todo caso, si la transferencia no hubiera tenido lugar con anterioridad al día 31 de diciembre por causas imputables a la junta administrativa afectada, decaerá el derecho de ésta a obtener dicha financiación en el ejercicio en el que se trate.

Pasaría a tener la siguiente redacción:

Artículo 8.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en esta ordenanza dará lugar a la no percepción de la financiación anual que corresponda.

Considerando lo dispuesto en los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la normativa vigente en materia de transparencia,

Considerando el dictamen de la comisión informativa celebrada ese mismo día, con anterioridad,

El Pleno de la Corporación, por MAYORÍA ABSOLUTA DEL NÚMERO LEGAL DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN (todos los concejales asistentes, esto es, 6 de los 7 que la integran), ACUERDA:

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza sobre la Financiación de las Juntas Administrativas integradas en el término municipal de Peñacerrada-Urizaharra, siendo su redacción definitiva la que, a continuación, se transcribe en su integridad:

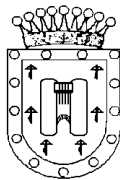
«Ordenanza sobre la financiación de las juntas administrativas integradas en el término municipal de Peñacerrada-Urizaharra

Artículo 1. Objeto

El objeto de la presente ordenanza es la regulación del régimen jurídico general de financiación de las Juntas Administrativas de Baroja, Faido, Loza, Montoria, Payueta y Peñacerrada, integradas en el término municipal de Peñacerrada-Urizaharra.

Artículo 2. Carácter de las aportaciones

Las cantidades que, en aplicación de la presente ordenanza perciban las juntas administrativas del municipio de Peñacerrada-Urizaharra, constituyen un ingreso ordinario de sus respectivas haciendas, de libre disposición y no condicionadas, para



el sostenimiento y prestación de los servicios que, conforme a la normativa que las regula, les corresponden, así como para financiar los gastos corrientes de organización y gestión del propio concejo.

Artículo 3. Beneficiarios

Tendrán la condición de beneficiarias, las Juntas Administrativas de Baroja, Faido, Loza, Montoria, Payueta y Peñacerrada.

Artículo 4. Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios estarán sujetos a las siguientes obligaciones:

Primero: los órganos de gobierno de las entidades locales menores deberán estar legalmente constituidos.

Segundo: el/la regidor/a presidente/a de cada junta administrativa o persona que designe, deberá presentar en la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra, con anterioridad al 30 de septiembre del año siguiente al que se refieran, o en la fecha en la que se establezca reglamentariamente, las cuentas anuales de su concejo (gastos, ingresos y existencias en caja) debidamente aprobadas en el formato exigido por la Diputación Foral de Álava, con acreditación del registro de entrada en el ente foral.

Tercero: los beneficiarios deberán someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que el ayuntamiento pueda realizar.

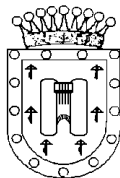
Artículo 5. Obligaciones del ayuntamiento

El ayuntamiento estará sujeto a las siguientes obligaciones:

Primero: el ayuntamiento dotará anualmente en sus presupuestos, una partida presupuestaria en concepto de transferencias corrientes para contribuir a financiar los gastos en los que incurran dichas entidades en los términos establecidos en la presente ordenanza.

Segundo: el ayuntamiento realizará las transferencias en una única aportación antes del 31 de octubre de cada ejercicio, siempre que éstas hayan cumplido las obligaciones señaladas en el artículo 4º de esta ordenanza.

Tercero: con carácter excepcional, en caso de que alguna junta administrativa incumpla las obligaciones establecidas en el art. 4º de la presente ordenanza, el Ayuntamiento procederá al reparto del importe que le pudiera corresponder en concepto de cantidad fija (700,00 €), entre todas aquellas entidades cuyos órganos de gobierno estén legalmente constituidos y que hayan presentado la documentación exigida en plazo. La cuantía que por este concepto pudiera corresponder será igual para todas las juntas administrativas que opten a este reparto excepcional.



Artículo 6. Criterios de financiación

La financiación se llevará a cabo conforme a la siguiente regla:

Sobre el crédito presupuestado cada año a tales efectos en la partida 943.434.000 transferencias corrientes a las juntas administrativas del municipio, se asignará una cantidad fija de setecientos euros (700,00 euros) a cada una.

El resto se dividirá entre el número de empadronados en el municipio, correspondiendo a cada entidad la cantidad proporcional al número de empadronados en su término concejil.

A efectos de financiación, la fecha de referencia para determinar el número de empadronados en el municipio y en cada una de las juntas administrativas, será el 1 de enero del ejercicio económico al que corresponda la transferencia.

Artículo 7. Compatibilidad con otros ingresos

La financiación establecida en la presente ordenanza es compatible con los ingresos propios de cada junta administrativa, así como con cualquier otra subvención o ingreso que puedan recibir de otra entidad, pública o privada, incluso del propio Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra.

Artículo 8.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en esta ordenanza dará lugar a la no percepción de la financiación anual que corresponda.

Disposición final. Entrada en vigor

La presente ordenanza entrará en vigor una vez se apruebe definitivamente por el ayuntamiento, y sea publicado su texto completo en el BOTHA, y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del citado texto legal.

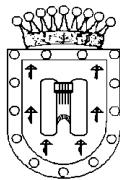
Anexo I

Trabajos de desbroce, mantenimiento y acondicionamiento de caminos

Los trabajos de desbroce de los caminos catalogados identificados en plano adjunto (anexo II), que discurren por los distintos términos concejiles del municipio, serán costeados anualmente por el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra.

Por otro lado, los trabajos de desbrozado, acondicionamiento y mantenimiento de los caminos no catalogados, será ejecutado por cuenta de cada entidad titular.

Anexo II



Plano (a disposición de los interesados en el ayuntamiento)»

Segundo.- Someter dicha modificación de la Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el BOTHA y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de TREINTA DÍAS para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Simultáneamente, publicar el texto de la modificación de la Ordenanza municipal en el portal web del Ayuntamiento [*dirección* www.penacerrada-urizaharra.com] con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto.

OCTAVO.- ORDENANZAS FISCALES. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

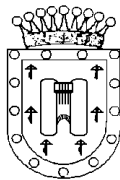
La Secretaria informa que se trata de adaptar el texto de las Ordenanzas Fiscales correspondientes al IBI, ICIO, IIVTNU e IVTM, a las Normas Forales reguladoras de los diferentes impuestos vigentes en la actualidad. Añade que además, en lo que respecta a la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se trata tanto de realizar una serie de precisiones en cuanto a la determinación de la cuota del impuesto en caso de acreditar en el Ayuntamiento la baja temporal del vehículo ante la jefatura de tráfico, como de especificar la documentación que deben aportar los titulares de vehículos agrícolas en caso de optar a la exención por este concepto.

Considerando lo dispuesto en el artículo 16 de la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales,

Considerando el dictamen de la Comisión Informativa Preparatoria de los Asuntos del Pleno celebrada ese mismo día con anterioridad,

El Pleno de la Corporación, por MAYORÍA ABSOLUTA DEL NÚMERO LEGAL DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN (todos los concejales asistentes, esto es, 6 de los 7 que la integran), ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de los siguientes impuestos: IBI, ICIO, IIVTNU e IVTM con la redacción que a se recoge en el Anexo I del presente acta.



SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el BOTHA, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [*dirección* www.penacerrada-urizaharra.com].

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto que fuere pertinente.

NOVENO.- SOLICITUD DE AYUDA EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA D.F.A. PARA EVITAR LA DESPOBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL THA.

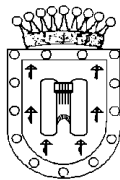
Visto el Decreto Foral nº 32/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 3 de julio, por el que se aprueban las bases reguladoras generales y la convocatoria de subvenciones relativas a diferentes líneas de ayuda para evitar la despoblación de los municipios del Territorio Histórico de Álava publicada en el BOTHA nº 78, de 6 de julio de 2018.

Resultando que este Ayuntamiento considera conveniente solicitar una subvención, que junto a la concedida por la Excm. Diputación Foral de Álava en el marco del Plan Foral de Obras y Servicios 2018-2019, y a la que, en su caso pudiera conceder el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020, permita cubrir los costes de habilitar en el edificio sito en Avda. Urizaharra nº 17 de Peñacerrada una zona destinada a local de servicios municipales y otra a local de comercio municipal.

Resultando lo dispuesto en la base 4ª del Anexo II del Decreto Foral nº 32/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 3 de julio,

Considerando el dictamen de la Comisión Informativa Preparatoria de los Asuntos del Pleno celebrada ese mismo día con anterioridad,

El Pleno de la Corporación, por MAYORÍA ABSOLUTA DEL NÚMERO LEGAL DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN (5 de los 7 que la integran, con la ausencia de la concejala del grupo municipal A.M.I., Dña. Silvia Quintas Barrón y la abstención del Concejal del grupo municipal EAJ-PNV, D. Enrique González Gutiérrez), ACUERDA:



Primero.- Solicitar, para su inclusión en la convocatoria de subvenciones relativas a diferentes líneas de ayuda para evitar la despoblación de los municipios del Territorio Histórico de Álava aprobada por Decreto Foral nº 32/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 3 de julio, la obra de Rehabilitación Funcional de Edificio Existente para alojar local de comercio municipal y local de servicios municipales, cuyo presupuesto de ejecución conforme a anteproyecto redactado por la Arquitecta Asesora Municipal, Dña. Elena Martínez Litago con fecha 1 de junio de 2018, asciende a CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS Y CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (109.637,45 €) IVA inc. y un presupuesto en concepto de HONORARIOS TÉCNICOS por importe de OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS Y NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (8.291,92 €) IVA y demás conceptos incl.

Segundo.- Asumir el compromiso de mantener la instalación para el uso para el que se solicita la subvención o similar, si se justifica el cambio y el compromiso de facilitar o favorecer aquellas actuaciones que estén en manos del Consistorio y favorezcan la viabilidad económica del gestor, así como de no realizar ninguna actuación que pueda entorpecer la gestión.

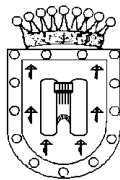
Tercero.- Aportar el inmueble de titularidad municipal por un periodo mínimo de 10 años para su destino al desarrollo de la actividad subvencionada.

.....

Aun habiendo sido dictaminado en la sesión de comisión informativa celebrada con carácter previo a la celebración del presente Pleno, de acuerdo con lo previsto en el art. 82 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde solicita la inclusión de 2 nuevos puntos en el orden del día de la sesión:

- CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ENTRE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA Y EL AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA-URIZAHARRA.
- PLAN DE GESTIÓN DEL LOCAL PARA CUYA REHABILITACIÓN HA SIDO SOLICITADA SUBVENCIÓN AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS DEL GOBIERNO VASCO EN EL MARCO DEL PROGRAMA LEADER 2014-2020.

El Sr. Alcalde justifica la urgencia de incluir el punto relativo al Servicio de Ayuda a Domicilio, en la necesidad de disponer del convenio de delegación de



competencias y encomienda de gestión a la mayor brevedad posible al objeto de que la Diputación Foral de Álava continúe prestando el servicio.

En lo que respecta al punto relativo al Plan de Gestión del Local, la urgencia se debe al requerimiento realizado por MENDINET, como entidad tramitadora de las solicitudes cursadas en el marco de las subvenciones LEADER 2014-2020, para la aportación del citado documento en un plazo de diez días desde su recepción por parte del ayuntamiento.

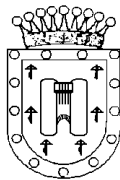
El Pleno de la Corporación, por MAYORÍA ABSOLUTA DEL NÚMERO LEGAL DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN (6 de los 7 Concejales que la integran), ACUERDA:

Ratificar la inclusión de 2 nuevos puntos en el orden del día de la presente sesión plenaria:

- CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ENTRE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA Y EL AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA-URIZAHARRA.
- PLAN DE GESTIÓN DEL LOCAL PARA CUYA REHABILITACIÓN HA SIDO SOLICITADA SUBVENCIÓN AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS DEL GOBIERNO VASCO EN EL MARCO DEL PROGRAMA LEADER 2014-2020.
- CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ENTRE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA Y EL AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA-URIZAHARRA.

La carencia de infraestructuras municipales necesarias para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en las debidas condiciones de calidad, motiva la necesidad de formalizar un convenio con la Diputación Foral de Álava para que sea ésta la que continúe prestando dicho servicio.

Conscientes de ello, el Pleno de la Corporación aprobó, en sesión válidamente celebrada con fecha 10 de mayo de 2018, el Reglamento Regulador del Servicio de Ayuda a Domicilio y la Ordenanza Reguladora de la Aplicación de Precios Públicos del Servicio de Ayuda a Domicilio en base a la propuesta elaborada por la Comisión Técnica-Jurídica constituida en el seno de Eudel. La aprobación de los documentos anteriores tenía por objeto unificar las condiciones de la prestación en todos aquéllos municipios en los que la competencia y la gestión fueran a ser asumidas por la Diputación Foral de Álava.



Aprobados definitivamente por este Ayuntamiento el Reglamento y la Ordenanza anteriormente indicadas tras la publicación de sus textos íntegros en el BOTHA nº 95 de 20 de agosto de 2018,

Visto el convenio de delegación de competencias y de encomienda de gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio entre la Diputación Foral y el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra propuesto por el ente foral,

Considerando lo dispuesto en los arts. 11, 47, 48, 49 y concordantes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,

Considerando el dictamen de la Comisión Informativa celebrada ese mismo día con anterioridad,

El Pleno de la Corporación, por MAYORÍA ABSOLUTA DEL NÚMERO LEGAL DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN (todos los concejales asistentes, esto es, 6 de los 7 que la integran), ACUERDA:

Primero.- Delegar en la Diputación Foral de Álava las competencias del Ayuntamiento en materia del servicio de ayuda a domicilio.

Segundo.- Aprobar la encomienda de gestión a la Diputación Foral de Álava de la prestación integral de dicho servicio de ayuda a domicilio.

Tercero.- Aprobar la suscripción del convenio de colaboración que se transcribe literalmente en el Anexo II del presente acta con la aceptación expresa de la totalidad de sus cláusulas.

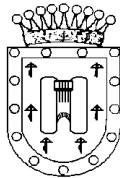
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde en la amplitud precisa, para la firma del referido convenio en representación del Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra, así como a adoptar cuantas medidas sean oportunas para su ejecución y desarrollo.

Quinto.- Remitir una certificación del presente acuerdo al Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava.

- PLAN DE GESTIÓN DEL LOCAL PARA CUYA REHABILITACIÓN HA SIDO SOLICITADA SUBVENCIÓN AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS DEL GOBIERNO VASCO EN EL MARCO DEL PROGRAMA LEADER 2014-2020.

Por parte del Sr. Alcalde se procede a dar lectura del borrador del Plan de Gestión del local de Servicios Municipal redactado, cuyos términos, a continuación, se transcriben en su literalidad:

“SITUACION ACTUAL



Si bien el entorno natural en el que vivimos es envidiable, la carencia de servicios hace que nuestro municipio no resulte un entorno atractivo para vivir o para desarrollar nuevas actividades.

En este momento, toda la actividad comercial existente en los 6 pueblos que componen el municipio de Peñacerrada-Urizaharra, se limita a 2 casas de turismo rural, una panadería y un bar-restaurante.

La carencia de muchos servicios unido al evidente envejecimiento de la población, motiva que muchos de nuestros vecinos y vecinas mayores cierren sus viviendas en nuestro municipio trasladándose a vivir a Vitoria-Gasteiz, lo que a su vez genera una mayor despoblación y una disminución del atractivo de nuestros pueblos.

PROYECTO MUNICIPAL Y COMARCAL PARA REACTIVAR LA ECONOMIA

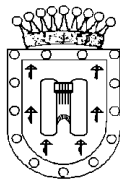
Ante la falta de actividad comercial en el municipio y el evidente envejecimiento de nuestra población, desde el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra se apuesta por la creación de un Local Municipal Multiservicios que facilite la vida de nuestros vecinos y vecinas y haga el municipio más atractivo al suponer un nuevo servicio para toda aquella persona o empresa que quiere venir a conocernos o, incluso, a vivir aquí.

Estamos convencidos de que es un proyecto que puede funcionar y que su repercusión no va a limitarse a nuestro municipio, sino que, como parte integrante de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa, va a aumentar el atractivo de toda la comarca tanto para visitarla, como para vivir o invertir en ella.

Después de analizar la actividad privada en el municipio de Peñacerrada-Urizaharra, estamos convencidos de que no hay nadie interesado en abrir un Local Comercial en un punto estratégico como el que planteamos por su cuenta, pero sí que contamos con iniciativas privadas para la Gestión de nuestro Proyecto.

Nuestro propósito es crear un espacio Público en un edificio en desuso propiedad del Ayuntamiento, para albergar varios servicios:

- 1. Comercio Rural (Ultramarinos).** *El proyecto consiste en habilitar un espacio para poder comercializar productos básicos y de primera necesidad, así como cualquier producto de la zona que reúna los requisitos para ser comercializado.*
- 2. Aseos Públicos.** *De forma que esté disponible para aquellas personas que se desplacen hasta aquí para trabajar o realizar deporte en nuestro municipio.*
- 3. Centro de Interpretación.** *Local donde exponer y dar a conocer los lugares con encanto y las costumbres, cultura y patrimonio de nuestra Comarca.*



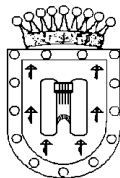
4. **Local de Servicios Multiusos** en el que albergar un taller de reparación y puesta a punto de los utensilios y maquinaria expuestos en los Museos Etnográficos al aire libre.

En relación al funcionamiento de la instalación, al frente de la gestión se encontrarían:

- a. **Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra en colaboración con la Asociación** encargada del mantenimiento de los Museos Etnográficos.
- b. **Iniciativa Particular** que sería la encargada de Gestionar los siguientes Servicios:
- a. Comercio Rural.
 - b. Centro de Interpretación.
 - c. Aparcamiento de Auto caravanas situado frente al edificio.
 - d. Centro de Compostaje comunitario.
 - e. Servicios Públicos.

GESTION DEL LOCAL MULTISERVICIOS

1. Con ayuda de otras instituciones públicas, el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra acondicionaría el local dotándole de todos los servicios necesarios para poder realizar las actividades previstas.
2. El local en el que está prevista la ubicación de taller de reparación de Utensilios y Maquinaria de los Museos Etnográficos, se gestionaría desde el propio Ayuntamiento en colaboración con la Asociación que dotó de material a los Museos.
3. El Comercio Rural (Ultramarinos) sería gestionado por iniciativa particular, de tal forma que el Ayuntamiento cedería el Local dotado de los servicios necesarios, a cambio de hacerse cargo de los gastos correspondientes a los suministros consumidos en el local y del buen funcionamiento de los siguientes servicios:
 - a. **Comercio Rural.**
Dando un buen servicio mínimo de 4 horas/día durante la semana y de 7 horas/día durante sábado y domingo pudiendo cerrar un día entre semana.



Manteniéndolo en buen estado de orden y limpieza. Corriendo por cuenta de la persona que lo regente el material y los electrodomésticos necesarios para su funcionamiento.

b. Centro de Interpretación.

Manteniéndolo abierto y en buen estado de orden y limpieza durante el mismo horario que el comercio rural.

Todo el material de la exposición y folletos informativos serían facilitados por el Ayuntamiento.

c. Aparcamiento de Auto-caravanas.

Manteniéndolo abierto y en buen estado de orden y limpieza el mismo horario que el comercio rural y cobrando las tasas por la utilización de servicios.

d. Servicios Públicos.

Manteniéndolo abierto y en buen estado de orden y limpieza el mismo horario que el comercio rural y cobrando las tasas por la utilización de servicios.

e. Centro de Compostaje Comunitario.

Manteniéndolo en buen estado de limpieza y ejecutando las labores necesarias para el buen funcionamiento del compostador.

BENEFICIOS PARA LA COMARCA.

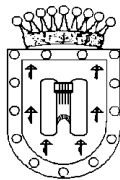
Entendemos la gran dificultad a la que se enfrentan los inversores en nuestra comarca, pero creemos que es necesario dotarla de más servicios con el fin de incrementar su atractivo tanto para vivir como para instalar negocios o desarrollar actividades económicas en Montaña Alavesa.

La puesta en marcha de este proyecto, supondría la creación, como mínimo, un puesto de trabajo autónomo.

Nuestras personas mayores, dispondrían de un comercio cercano en el que adquirir sus alimentos y artículos de primera necesidad.

Se ofrecerían varios servicios actualmente inexistentes, tanto a los vecinos de la Comarca como a toda persona que pase por Peñacerrada-Urizaharra o se traslade aquí para desarrollar cualquier tipo de actividad.

Constituiría un punto de venta de los productos de la zona, como por ejemplo del famoso pan de Peñacerrada, del vino de nuestros vecinos de Rioja Alavesa o de los Quesos y Morcillas de Montaña Alavesa. “



Habida cuenta del requerimiento practicado por Mendinet mediante escrito de fecha 31 de agosto de 2018 (registro de entrada nº 789, de 5 de septiembre), por el que se concede a este Ayuntamiento un plazo de diez días para aportar el documento denominado Plan de Gestión del local para cuya rehabilitación ha sido solicitada subvención al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco en el marco del programa Leader 2014-2020,

Considerando la necesidad de concretar con la técnico de la Asociación de Desarrollo Rural Izki los términos en los que se plantea el documento redactado,

El Pleno de la Corporación, por MAYORÍA ABSOLUTA DEL NÚMERO LEGAL DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN (todos los concejales asistentes, esto es, 6 de los 7 que la integran), ACUERDA:

Facultar al Sr. Alcalde para que apruebe el Plan de Gestión del local para cuya rehabilitación como local de comercio municipal y local de servicios municipales ha sido solicitada subvención al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco en el marco del programa Leader 2014-2020, una vez debatidos sus términos con técnicos de la Asociación de Desarrollo Rural Izki.

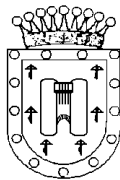
DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Concejales del grupo municipal EAJ-PNV, D. Enrique González Gutiérrez, formula a los Concejales del grupo municipal AMI, D. José Luis Armentia Gainzarain y D. Ricardo Sáez Ibisate, las siguientes preguntas:

1ª.- Habiendo votado a favor del presupuesto municipal 2018, les pregunta su opinión acerca de que la solicitud de licencia de obras cursada por la Junta Administrativa de Faido en el mes de abril aún no haya tenido respuesta y por contra, una licencia solicitada por la Junta Administrativa de Baroja-Zumentu en mes y medio, haya sido contestada.

El Concejales del grupo municipal A.M.I. y 1^{er} Teniente de Alcalde, D. José Luis Armentia Gainzarain, responde que si una solicitud de licencia de obras no presenta complicación en cuanto a su tramitación, debiera estar resuelto en el tiempo que media entre la celebración de una sesión plenaria y la siguiente.

2ª.- El Concejales del grupo municipal EAJ-PNV, D. Enrique González Gutiérrez, manifiesta que si hay un servicio denominado “urbanismo” en el Ayuntamiento que informa que un determinado terreno es urbano y en base a esa calificación se requiere por el Ayuntamiento y posteriormente se aporta por el interesado una determinada



documentación, en caso de existir error en la calificación del suelo alguien debe responsabilizarse del mismo....

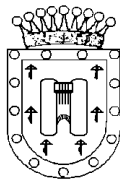
3ª.- El Concejal del grupo municipal EAJ-PNV, D. Enrique González Gutiérrez, recuerda que en el presupuesto de ingresos correspondiente al presente ejercicio 2018, la previsión recogida en concepto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), ascendía a 5.000,00 €, cantidad que los miembros de su grupo municipal apreciaron muy reducida, lo que se argumentó en base al volumen de licencias solicitadas. El Sr. González Gutiérrez considera que ese hecho (bajo volumen de licencias solicitadas) choca de plano con el hecho de que un proyecto de tan poca dificultad técnica como el presentado por la Junta Administrativa de Faido, lleve tanto tiempo sin ser respondido.

4ª.- El Sr. González Gutiérrez, recuerda que el crédito asignado a la partida presupuestaria "Asesoramiento Jurídico" asciende a 15.000,00 €, y sin embargo, los ingresos previstos en concepto del ICIO son ridículos. Advierte a los concejales D. José Luis Armentia Gainzarain y D. Ricardo Sáez Ibisate, tengan cuidado con sus decisiones en el Ayuntamiento, dado que, si bien los miembros del grupo municipal EAJ-PNV podrían, en caso de necesidad, disponer de los servicios jurídicos del partido, los miembros de la Agrupación Municipal Independiente-A.M.I. no cuentan con el servicio de asesoramiento jurídico contratado por el Ayuntamiento, pudiendo ser exclusivamente dispuesto por Alcalde y Secretaria Municipal. Considera que, en este sentido, los Corporativos del grupo municipal Agrupación Municipal Independiente-A.M.I., se encuentran "vendidos".

Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las veintiuna horas cincuenta minutos del día señalado en el encabezamiento, por la Presidencia se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta, de lo que yo como Secretaria, doy fe.

EL ALCALDE

LA SECRETARIA



ANEXO I

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

I. Disposiciones generales

Artículo 1

Este ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava y en la Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, particular del tributo, exige el impuesto sobre bienes inmuebles con arreglo a la presente ordenanza, de la que es parte integrante el anexo en el que se contienen la tarifa aplicable y el período de recaudación.

Artículo 2

La ordenanza se aplica en todo el término municipal.

II. Hecho imponible

Artículo 3

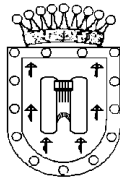
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:

- a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
- b) De un derecho real de superficie.
- c) De un derecho real de usufructo.
- d) Del derecho de propiedad.

2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas.

3. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos y de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en el artículo 4 de la presente ordenanza fiscal.

4. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos municipales se entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el respectivo término municipal.



Artículo 4

1. A los exclusivos efectos catastrales, tiene la consideración de bien inmueble la parcela o porción de suelo de una misma naturaleza, enclavada en un término municipal y cerrada por una línea poligonal que delimita, a tales efectos, el ámbito espacial del derecho de propiedad de un propietario o de varios pro indiviso y, en su caso, las construcciones emplazadas en dicho ámbito, cualquiera que sea su dueño, y con independencia de otros derechos que recaigan sobre el inmueble.

Tendrán también la consideración de bienes inmuebles:

a) Los diferentes elementos privativos de los edificios que sean susceptibles de aprovechamiento independiente, sometidos al régimen especial de propiedad horizontal, así como el conjunto constituido por diferentes elementos privativos mutuamente vinculados y adquiridos en unidad de acto y, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, los trasteros y las plazas de estacionamiento en pro indiviso adscritos al uso y disfrute exclusivo y permanente de un titular. La atribución de los elementos comunes a los respectivos inmuebles, a los solos efectos de su valoración catastral, se realizará en la forma que se determine reglamentariamente.

b) Los comprendidos en el apartado 4 de este artículo.

c) El ámbito espacial de un derecho de superficie y el de una concesión administrativa sobre los bienes inmuebles o sobre los servicios públicos a los que se hallen afectos, salvo que se den los supuestos previstos en las letras anteriores.

2. Tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza urbana:

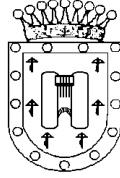
a) El suelo de naturaleza urbana. Se entiende por tal:

a') El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano, urbanizado o equivalente.

b') Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquéllos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que estén incluidos en sectores o ámbitos espaciales delimitados, así como los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo.

c') Los terrenos que se fraccionen en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello represente alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a otros efectos que no sean los del presente Impuesto.

b) Las construcciones de naturaleza urbana, entendiéndose por tales:



a') Los edificios sean cualesquiera los elementos de que estén contruidos, los lugares en que se hallen emplazados, la clase de suelo en que hayan sido levantados y el uso a que se destinen, aun cuando por la forma de su construcción sean perfectamente transportables, y aun cuando el terreno sobre el que se hallen situados no pertenezca al dueño de la construcción, y las instalaciones comerciales e industriales asimilables a los mismos, tales como diques, tanques y cargaderos.

b') Las obras de urbanización y de mejora, como las explanaciones y las que se realicen para el uso de los espacios descubiertos, considerándose como tales los recintos destinados a mercados, los depósitos al aire libre, los campos o instalaciones para la práctica del deporte, los muelles, los estacionamientos y los espacios anexos a las construcciones.

c') Las demás construcciones no calificadas expresamente como de naturaleza rústica en el apartado siguiente.

Se exceptúa de la consideración de suelo de naturaleza urbana el que integre los bienes inmuebles de características especiales.

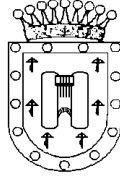
3. Se entiende por suelo de naturaleza rústica aquél que no sea de naturaleza urbana conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, ni esté integrado en un bien inmueble de características especiales.

En particular, y a efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza rústica:

a) Los terrenos que no tengan la consideración de urbanos conforme a lo dispuesto en la letra a) del apartado anterior.

b) Las construcciones de naturaleza rústica, entendiendo por tales los edificios e instalaciones de carácter agrario que, situados en los terrenos de naturaleza rústica, sean indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.

En ningún caso tendrán la consideración de construcciones a efectos de este impuesto los tinglados o cobertizos de pequeña entidad utilizados en explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales que, por el carácter ligero y poco duradero de los materiales empleados en su construcción, sólo sirvan para usos tales como el mayor aprovechamiento de la tierra, la protección de los cultivos, albergue temporal de ganados en despoblado o guarda de aperos e instrumentos propios de la actividad a la que sirven y están afectos; tampoco tendrán la consideración de construcciones a efectos de este impuesto las obras y mejoras incorporadas a los terrenos de naturaleza rústica, que formarán parte indisoluble del valor de éstos.



4. Los bienes inmuebles de características especiales constituyen un conjunto complejo de uso especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble.

Se consideran bienes inmuebles de características especiales los comprendidos, conforme al párrafo anterior, en los siguientes grupos:

- a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo, y las centrales nucleares.
- b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluidos su lecho o vaso, excepto las destinadas exclusivamente al riego.
- c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.
- d) Los aeropuertos y puertos comerciales.

III. Exenciones

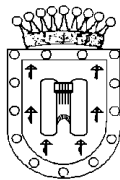
Artículo 5

1. Gozarán de exención los siguientes bienes:

- a) Los que sean propiedad del Estado, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la Diputación Foral de Álava, de las entidades municipales o de las entidades locales, y estén directamente afectos a la defensa, seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios.

En virtud de la disposición adicional novena de la Norma Foral 7/2004, de 10 de mayo, con efectos de 1 de enero de 2004, las carreteras, los caminos y las demás vías terrestres cuya explotación esté encomendada a Vías de Álava, SA, gozarán de la exención establecida en esta letra a), aun cuando su utilización no fuera gratuita.

- b) Los que sean propiedad de las universidades públicas que estén directamente afectos a los servicios educativos.
- c) Las carreteras, los caminos y las demás vías terrestres siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
- d) Los que sean propiedad de las cuadrillas, municipios, hermandades y juntas administrativas, cuyo destino sea el servicio o uso público. Lo dispuesto anteriormente no será de aplicación cuando sobre los bienes o sobre el servicio público al que estén afectados recaiga una concesión administrativa u otra forma de gestión indirecta, a no ser que su titular sea una asociación sin ánimo de lucro que realice actividades de



colaboración con la entidad citada que hayan sido declarados de interés municipal por el órgano competente del mismo.

Asimismo gozarán de exención los montes y demás bienes inmuebles, sobre los que recaiga un aprovechamiento de la comunidad y los montes vecinales en mano común.

e) Los montes poblados con especies de crecimiento lento de titularidad pública o privada.

Esta exención se refiere a especies forestales de crecimiento lento, conforme al nomenclátor de especies del departamento de agricultura de la Diputación Foral de Álava, cuyo principal aprovechamiento sea la madera, y aquella parte del monte poblada por las mismas, siempre y cuando la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.

Asimismo, los montes no contemplados en el párrafo anterior, en cuanto a la parte repoblada de las fincas en que las corporaciones, entidades y particulares realicen repoblaciones forestales, y también los tramos en regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la administración forestal. La exención prevista en este párrafo tendrá una duración de quince años contados a partir del período impositivo siguiente a aquél en que se realice su solicitud.

f) Los de la iglesia católica, en los términos previstos en el acuerdo entre el Estado y la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979.

g) Los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.

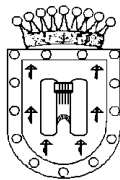
h) Los de la Cruz Roja y otras entidades asimilables que reglamentariamente se determinen.

i) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.

j) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas.

No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.

k) Los bienes inmuebles que tengan la condición de monumento a que se refiere la letra a) del apartado 2, del artículo 2 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural



Vasco. Esta exención alcanzará tanto a los bienes culturales calificados como inventariados, siempre que se reúnan los requisitos que determina la citada Ley 7/1990, de 3 de julio.

Igualmente estarán exentos los bienes inmuebles que formen parte de un conjunto monumental a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 2 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. Esta exención sólo alcanzará a los inmuebles, calificados o inventariados, que reuniendo los requisitos que determina la citada Ley 7/1990, de 3 de julio, estén incluidos dentro del régimen de protección especial.

Asimismo, quedarán exentos los bienes inmuebles que integren el Patrimonio Histórico Español a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

l) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada.

m) Por criterios de eficacia y economía en la gestión recaudatoria del tributo, estarán exentos los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía de 0,01 euros.

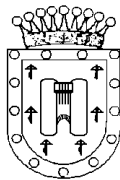
IV. Sujeto pasivo

Artículo 6

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, así como las herencias que se hallen pendientes del ejercicio de un poder testatorio o del ejercicio del usufructo poderoso, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este Impuesto.

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.”

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. Los Ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota líquida del Impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.



Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.

V. Base imponible

Artículo 7

1. La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor de los bienes inmuebles.
2. Para la determinación de la base imponible se tomará como valor de los bienes inmuebles el valor catastral de los mismos, que se fijará tomando como referencia el valor de mercado de aquéllos, sin que, en ningún caso, pueda exceder de éste.

Artículo 8

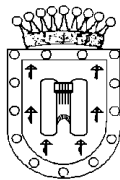
1. El valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana estará integrado por el valor del suelo y de las construcciones.
2. Para calcular el valor del suelo se tendrán en cuenta las circunstancias urbanísticas que le afecten.
3. Para calcular el valor de las construcciones se tendrán en cuenta, además de las condiciones urbanístico-edificatorias, su carácter histórico-artístico, su uso o destino, la calidad y antigüedad de las mismas y cualquier otro factor que pueda incidir en el mismo.

Artículo 9

1. El valor catastral de los bienes de naturaleza rústica estará integrado por el valor del terreno y el de las construcciones.
2. El valor de los terrenos de naturaleza rústica se calculará capitalizando al interés que reglamentariamente se establezca, las rentas reales o potenciales de los mismos, según la aptitud de la tierra para la producción, los distintos cultivos o aprovechamientos y de acuerdo con sus características catastrales.

Para calcular dichas rentas se podrá atender a los datos obtenidos por investigación de arrendamientos o aparcerías existentes en cada zona o comarca de características agrarias homogéneas.

Asimismo, se tendrá en cuenta, a los efectos del presente apartado, las mejoras introducidas en los terrenos de naturaleza rústica, que forman parte indisoluble de su valor, y, en su caso, los años transcurridos hasta su entrada en producción; para la de aquéllos que sustenten producciones forestales se atenderá a la edad de la plantación, estado de la masa arbórea y ciclo de aprovechamiento.



En todo caso, se tendrá en cuenta la aplicación o utilización de medios de producción normales que conduzcan al mayor aprovechamiento, pero no la hipotética aplicación de medios extraordinarios.

No obstante, cuando la naturaleza de la explotación o las características del municipio dificulten el conocimiento de rentas reales o potenciales, podrá calcularse el valor catastral de los bienes, incluidos sus mejoras permanentes y plantaciones, atendiendo al conjunto de factores técnico-agrarios y económicos y a otras circunstancias que les afecten.

3. El valor de las construcciones rústicas se calculará aplicando las normas contenidas en el apartado 3 del artículo anterior, en la medida que lo permita la naturaleza de aquéllas.

Artículo 10

Los valores catastrales a que se refiere el apartado 2 del artículo 7 de esta ordenanza, se fijan a partir de los datos obrantes en los correspondientes catastros inmobiliarios. Dichos valores catastrales podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización, según los casos, en los términos previstos en los artículos 12, 13 y 14, respectivamente, de la presente ordenanza.

Artículo 11

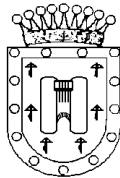
Los catastros inmobiliarios rústico y urbano están constituidos por un conjunto de datos y descripciones de los bienes inmuebles rústicos y urbanos, con expresión de superficies, situación, linderos, cultivos o aprovechamientos, calidades, valores y demás circunstancias físicas, económicas y jurídicas que den a conocer la propiedad territorial y la definan en sus diferentes aspectos y aplicaciones.

Artículo 12

1. La fijación de los valores catastrales se llevará a cabo con arreglo a los criterios de valoración regulados en los artículos 8 y 9 de esta ordenanza.

2. A tal fin, la Diputación Foral de Álava realizará, previamente, una delimitación del suelo de naturaleza urbana ajustada a las disposiciones urbanísticas vigentes. No obstante lo anterior, en aquellos términos municipales en los que no se hubiese producido variación de naturaleza del suelo, no se precisará dicha nueva delimitación.

3. Una vez realizados, en su caso, los trabajos de delimitación del suelo a que se refiere el apartado anterior, la Diputación Foral de Álava elaborará las correspondientes ponencias de valores en las que se recogerán los criterios, tablas de valoración y demás elementos precisos para llevar a cabo la fijación de los valores catastrales.



4. De la delimitación del suelo de naturaleza urbana y de las ponencias de valores, la Diputación Foral dará audiencia al ayuntamiento a fin de que en el plazo máximo de 15 días, informe lo que estime procedente.

A la vista del informe del ayuntamiento, la Diputación Foral de Álava resolverá lo que estime oportuno.

5. Aprobada por la Diputación Foral la delimitación del suelo de naturaleza urbana para el término municipal, se procederá a su exposición pública por un plazo de 15 días para que los interesados formulen las reclamaciones que estimen oportunas. La exposición al público se llevará a cabo en las oficinas del ayuntamiento y se anunciará en el BOTHA y en los diarios de mayor circulación de dicho territorio.

6. Las ponencias de valores aprobadas por la Diputación Foral serán publicadas en el BOTHA y por edictos del ayuntamiento, dentro del año inmediatamente anterior a aquél en que deban surtir efecto los valores catastrales resultantes de las mismas.

7. A partir de la publicación de las ponencias, los valores catastrales resultantes de las mismas deberán ser notificados individualmente a cada sujeto pasivo o mediante personación del sujeto pasivo o persona autorizada al efecto, antes de la finalización del año inmediatamente anterior a aquél en que deban surtir efecto dichos valores.

La notificación mediante personación se regulará reglamentariamente, y determinará un plazo para la retirada de las notificaciones, que no podrá ser inferior a diez días, a contar del siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el BOTHA. Transcurrido el plazo fijado para la retirada de las notificaciones, si ésta no se hubiera retirado, se entenderá, a todos los efectos, como notificado, el correspondiente acto administrativo.

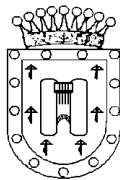
8. Los valores catastrales así fijados deberán ser revisados cada ocho años.

Artículo 13

1. Los valores catastrales se modificarán por la diputación foral, de oficio o a instancia del ayuntamiento, cuando el planeamiento urbanístico u otras circunstancias pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre aquéllos y los valores de mercado de los bienes inmuebles situados en el término municipal o en alguna o varias zonas del mismo.

2. Tal modificación requerirá inexcusablemente, la elaboración de nuevas ponencias de valores en los términos previstos en el artículo anterior, sin necesidad de proceder a una nueva delimitación del suelo de naturaleza urbana.

3. Una vez elaboradas las ponencias, se seguirán los trámites y procedimientos regulados asimismo en el artículo anterior.



Artículo 14

Los antedichos valores catastrales podrán ser actualizados de acuerdo con los coeficientes que se fijen en las normas forales de presupuestos generales del Territorio Histórico de Álava.

VI. Cuota tributaria

Artículo 15

1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar el tipo de gravamen a la base imponible.

La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas legalmente.

2. El tipo de gravamen es el que se contiene en el anexo.

VII. Bonificaciones

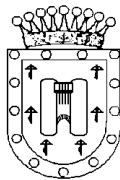
Artículo 16

1. Gozarán de una bonificación del 95 por ciento en la cuota del impuesto, los terrenos rústicos con plantación o población forestal situados en espacios naturales protegidos.

2. Tendrán derecho a una bonificación del 90 por ciento en la cuota del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquél en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos. En el caso de que el interesado, que haya gozado de la mencionada bonificación por las obras de urbanización de sus terrenos, proceda a la promoción inmobiliaria de inmuebles sobre dichos terrenos, el plazo de aplicación será de cinco períodos impositivos.

3. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento en la cuota del impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y sociales. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquél en que se solicite.



4. Tendrán derecho a una bonificación en la cuota los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria, en los términos establecidos en la Norma Foral 16/1997, de 9 de junio, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

VIII. Devengo

Artículo 17

1. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.
2. El período impositivo coincide con el año natural
3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en los bienes gravados tendrán efectividad en el período impositivo siguiente a aquél en que tuvieron lugar, sin que dicha eficacia quede supeditada a la notificación de los actos administrativos correspondientes.

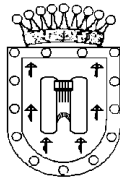
Artículo 18

1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en los términos previstos en la Norma Foral General Tributaria. A estos efectos los notarios solicitarán información y advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre las deudas pendientes por el impuesto sobre bienes inmuebles asociadas al inmueble que se transmite, sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto, sobre la afección de los bienes al pago de la cuota tributaria y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones, por no efectuarlas en plazo o por la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas.
2. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.

IX. Gestión del impuesto

Artículo 19

El impuesto se gestiona a partir del padrón del mismo que se formará anualmente, y que estará constituido por censos comprensivos de los bienes inmuebles, sujetos pasivos y valores catastrales, separadamente para los de naturaleza rústica y urbana. Dicho padrón estará a disposición del público en el ayuntamiento.



Artículo 20

1. Los sujetos pasivos están obligados a declarar en el ayuntamiento, siempre que en el término municipal de éste radiquen los bienes sujetos a este impuesto, en el plazo que reglamentariamente se determine:

a) En los casos de construcciones nuevas, deberán realizar las correspondientes declaraciones de alta.

b) Cuando se produzcan transmisiones de bienes sujetos a este impuesto, el adquirente deberá presentar declaración de alta junto con el documento que motiva la transmisión; igualmente el transmitente deberá presentar la declaración de baja con expresión del nombre y domicilio del adquirente, linderos y situación de los bienes, fecha de transmisión y concepto en que se realiza.

Si la transmisión está motivada por acto "mortis causa" el plazo que se establezca comenzará a contar a partir de la fecha en que se hubiera liquidado el impuesto sobre sucesiones, debiendo el heredero formular ambas declaraciones, de alta y de baja.

c) Todas las variaciones que puedan surgir por alteraciones de orden físico, económico o jurídico concernientes a los bienes gravados.

La falta de presentación de las declaraciones a que se refiere este apartado, o el no efectuarlas en los plazos establecidos, constituirá infracción tributaria.

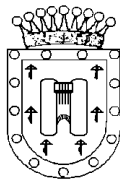
Artículo 21

La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los catastros inmobiliarios, resultantes de revisiones catastrales, fijación, revisión y modificación de valores catastrales, actuaciones de la inspección o formalización de altas y comunicaciones, se considerarán acto administrativo, y conllevarán la modificación del padrón del impuesto. Cualquier modificación del padrón que se refiera a datos obrantes en los catastros inmobiliarios, requerirá, inexcusablemente, la previa alteración de estos últimos en el mismo sentido.

Artículo 22

1. Las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación, tanto en período voluntario como por la vía de apremio, corresponde a este ayuntamiento, siempre que en su término municipal radiquen los bienes gravados, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 3 siguiente.

2. En concreto, corresponde al ayuntamiento la tramitación y liquidación de altas y bajas, exposición al público de padrones, resolución de recursos y reclamaciones, cobranza del impuesto, aplicación de exenciones y bonificaciones y actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a las materias de este impuesto.



Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la concesión y denegación de las exenciones y bonificaciones previstas en esta ordenanza requerirá, en todo caso, el posterior traslado a la Diputación Foral de la resolución que se adopte por este ayuntamiento.

3. Corresponde de forma exclusiva a la diputación foral la realización y aprobación de las delimitaciones del suelo y de las ponencias de valores así como la fijación, revisión y modificación de dichas delimitaciones y valores catastrales y la formación, revisión, conservación y demás funciones inherentes a los catastros y al padrón del impuesto.

El ayuntamiento colaborará con la diputación foral para la formación y conservación del catastro.

Igualmente corresponde a la diputación foral la confección de los recibos cobratorios. En los casos en que el ayuntamiento establezca las bonificaciones de tipo personal a que se refieren los apartados 7 y 9 del artículo 15 de la Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, así como en los supuestos previstos en los apartados 4 y 5 del artículo 14 de la Norma Foral, la confección de los recibos corresponderá al ayuntamiento. Igualmente corresponde a la Diputación Foral la inspección catastral del impuesto.

Artículo 23

Los recursos y reclamaciones que se interpongan contra los actos aprobatorios de las ponencias de valores y contra los valores catastrales con arreglo a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la presente ordenanza fiscal, se regirán por lo dispuesto en los artículos 229 a 246 de la Norma Foral General Tributaria, siendo competente para resolver el recurso de reposición la Diputación Foral de Álava. La interposición de estos recursos y reclamaciones no suspenderá la ejecutoriedad de los actos.

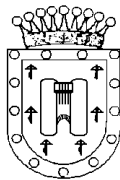
Artículo 24

1. El padrón se confeccionará por la Diputación Foral de Álava, que lo remitirá al ayuntamiento.

2. Una vez recibido, el ayuntamiento lo expondrá al público por un plazo de 15 días para que los contribuyentes afectados puedan examinarlo y formular, en su caso, las reclamaciones que consideren oportunas.

3. El ayuntamiento deberá comunicar a los presidentes de las juntas administrativas sitas en el término municipal, con dos días de antelación como mínimo, la fecha de comienzo de la exposición al público, a fin de que lo hagan saber al vecindario por los medios de costumbre.

Artículo 25



1. Concluido el plazo de exposición al público y resueltas las reclamaciones, se remitirá a la diputación foral la certificación del resultado de la misma para su aprobación.
2. Una vez aprobado, se confeccionarán por la Diputación Foral los correspondientes recibos, que se remitirán al ayuntamiento para proceder a su recaudación.

Disposición adicional

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 5 f) y en tanto permanezca en vigor el acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos fechado el 3 de enero de 1979, gozarán de exención los siguientes bienes:

- a) Los templos y capillas destinados al culto, y asimismo, sus dependencias o edificios anejos destinados a la actividad pastoral.
- b) La residencia de los obispos, de los canónigos y de los sacerdotes con cura de almas.
- c) Los locales destinados a oficinas, a la curia diocesana y a oficinas parroquiales.
- d) Los seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso y las universidades eclesiásticas en tanto en cuanto impartan enseñanzas propias de disciplina eclesiástica.
- e) Los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las órdenes, congregaciones religiosas e institutos de vida consagrada.

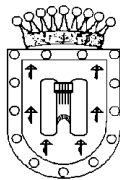
Disposiciones transitorias

Primera.

Las normas contenidas en las disposiciones transitorias de la Norma Foral 42/89, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, serán de aplicación en este municipio en cuanto le afecten.

Segunda.

Los beneficios fiscales en el impuesto sobre bienes inmuebles, reconocidos a la entrada en vigor de la Norma Foral 12/2003, de 31 de marzo de Modificación de las Haciendas Locales, cuyos supuestos de disfrute se encuentren recogidos en la misma, se mantendrán sin que, en caso de que tengan carácter rogado, sea necesaria su solicitud. Se mantendrán hasta la fecha de su extinción aquellos beneficios fiscales reconocidos en dicho impuesto cuyos supuestos de disfrute no se recogen en la presente ordenanza fiscal, con excepción de la exención prevista en la letra k) del artículo 4 de la Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en su redacción anterior a la Norma Foral 12/2003, que queda extinguida a su entrada en vigor.



Disposición final

La presente ordenanza fiscal municipal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles del que el siguiente anexo forma parte, entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el BOTHA, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación expresas.

Ordenanza reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles

Anexo

Tarifa

Bienes de naturaleza urbana: 0,30 por ciento

Bienes de naturaleza rústica: 0,40 por ciento

Bienes inmuebles de características especiales:

Periodo de recaudación: el presente impuesto se recaudará durante el 4º trimestre del año.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

I. Disposiciones generales

Artículo 1. Este ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del territorio histórico y la Norma Foral 45/1989, de 19 de julio, particular del tributo, establece y exige el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras con arreglo a la presente ordenanza, de la que es parte integrante el anexo en el que se contienen las tarifas aplicables.

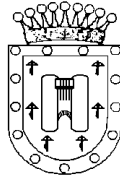
Artículo 2. La ordenanza se aplica en todo el término municipal.

II. Hecho imponible

Artículo 3. Constituye el hecho imponible de este impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda a este Ayuntamiento.

Artículo 4. A título enunciativo, constituyen supuestos de hecho imponible sujetos al impuesto los siguientes:

1. Las obras de construcción de edificaciones o instalaciones de todas clases de nueva planta.



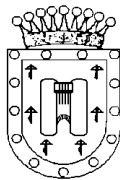
2. Las obras de ampliación de edificios o instalaciones de todas clases existentes.
3. Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.
4. Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.
5. Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso.
6. Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se refiere el apartado 2 del artículo 58 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.
7. Las obras de instalación de servicios públicos.
8. Los movimientos de tierra, tales como desmontes, excavaciones y terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o de edificación aprobado o autorizado.
9. La demolición de las construcciones, salvo en las declaradas de ruina inminente. 10. Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamiento, actividades industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.
11. La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública.
12. Cualesquiera obras, construcciones, o instalaciones que impliquen inversión de recursos económicos demostrativos de una capacidad económica y sujetos a licencia de obras o urbanística.

Artículo 5. No estarán sujetas a este impuesto las construcciones, obras o instalaciones ejecutadas sobre inmuebles cuya titularidad dominical corresponda a este ayuntamiento, siempre que ostente la condición de dueño de la obra.

III. Exenciones

Artículo 6. Estarán exentas del impuesto:

- a) La realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sean dueños el Estado, las comunidades autónomas, los territorios históricos o las entidades locales, que estando sujetas al mismo, vayan a ser directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.



b) La realización de cualquier construcción, instalación y obra de la que sean dueños los concejos del Territorio Histórico de Álava cuyo destino sea el servicio o uso público.

c) La realización de cualquier construcción, instalación u obra efectuada en los bienes a los que resulte de aplicación la exención contenida en la letra k) del apartado 1 del artículo 4 de la Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (bienes que tengan la consideración de monumentos a que se refiere la letra a) del apartado 2, del artículo 2, del artículo de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco).

d) La realización de cualquier construcción, instalación y obra de implantación de regadío, siempre que se encuentren dentro del plan de regadíos aprobado por la Diputación Foral de Álava. Esta exención se extiende tanto a las construcciones, instalaciones u obras que originen su implantación, como a las de conservación.

IV. Sujetos pasivos

Artículo 7

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, así como las herencias que se hallen pendientes del ejercicio de un poder testatorio o del ejercicio de un usufructo poderoso, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

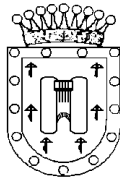
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

V. Base imponible

Artículo 8

La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.



No forman parte de la base imponible el impuesto sobre el valor añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

VI. Cuota tributaria

Artículo 9. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que se expresa en el anexo.

VII. Devengo

Artículo 10. El impuesto se devengará en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

VIII. Gestión

Artículo 11. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la comunicación previa, o cuando no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquélla o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible:

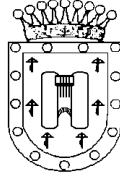
- a) En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo.
- b) En otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado de la construcción, instalación u obra.

Artículo 12. Si concedida la correspondiente licencia se modificara el proyecto inicial, deberá presentarse un nuevo presupuesto a los efectos de practicar una nueva liquidación provisional a tenor del presupuesto modificado en la cuantía que exceda del primitivo.

Artículo 13

1. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, la administración municipal, mediante la oportuna comprobación administrativa modificará, en su caso, la base imponible, practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

1. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, dentro del mes siguiente a la terminación de la obra o recepción provisional de la misma, se presentará declaración



de esta circunstancia en impreso que facilitará la administración municipal, acompañada de certificación del director facultativo de la obra, visada por el colegio profesional correspondiente, cuando sea viable, por la que se certifique el costo total de las obras incluidos los derechos facultativos del proyecto y dirección, beneficio industrial y otros que puedan existir por motivo de los mismos.

Artículo 14. A efectos de la liquidación del impuesto, las licencias otorgadas por aplicación del silencio administrativo positivo tendrá el mismo efecto que el otorgamiento expreso de licencias.

Artículo 15. El ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación.

Artículo 16. Si el titular de una licencia desistiera de realizar las obras, construcciones o instalaciones autorizadas, mediante renuncia expresa formulada por escrito, el ayuntamiento procederá al reintegro o anulación total de la liquidación provisional practicada.

Artículo 17. Caducada una licencia el ayuntamiento procederá al reintegro o anulación de la liquidación practicada, salvo que el titular solicite su renovación y el ayuntamiento la autorice.

Disposición final

La presente ordenanza con su anexo fue aprobada definitivamente en la fecha que en éste se indica, y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.

La presente ordenanza fiscal municipal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, de la que el siguiente anexo forma parte, entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el BOTA, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación expresas.

Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

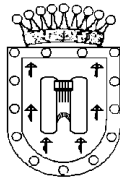
Anexo

Tarifa

Clase de construcción, instalación, u obra Tipo de gravamen (por ciento)
Construcciones, instalaciones y obras: 2,5

**ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA**

I. Disposiciones generales



Artículo 1

El Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.2.b) de la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, Reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava y en la Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, establece y exige el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, con arreglo a la presente ordenanza.

Dicho impuesto es un tributo directo.

Artículo 2

La ordenanza se aplica en todo el término municipal.

II. Hecho imponible

Artículo 3

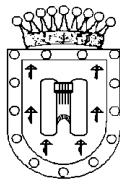
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título, o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

2. No está sujeto a este impuesto, el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles.

3. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

Igual disposición se aplicará a las aportaciones, adjudicaciones y transmisiones que, en los mismos supuestos a que se refiere el párrafo anterior, realicen los miembros de la pareja de hecho constituida conforme a lo dispuesto en la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges, entre miembros de la pareja de hecho constituida conforme a lo dispuesto en la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo, o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, o extinción de la pareja de hecho, sea cual sea el régimen económico matrimonial o el régimen económico patrimonial, respectivamente.



4. Estará sujeto al impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles.

III. Exenciones y bonificaciones

Artículo 4. Exenciones

1.- Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:

- a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
- b) Las transmisiones de bienes a los que resulte de aplicación la exención contenida en la letra k) del apartado 1 del artículo 4 de la Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.

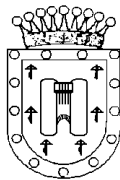
2.- Asimismo estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o Entidades:

- a) El Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Diputación Foral de Alava, así como los Organismos Autónomos del Estado y las entidades de derecho público de carácter análogo de las citadas Administraciones Territoriales.

El Municipio de Peñacerrada-Urizaharra y demás Entidades Municipales integradas o en las que se integre, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado.

- b) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.
- c) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y Montepíos constituidas conforme a lo previsto en la legislación vigente.
- d) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a las mismas.
- e) La Cruz Roja y otras Entidades asimilables que reglamentariamente se determinen.
- f) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios Internacionales.

Artículo 5. Bonificaciones



Gozarán de una bonificación del 90 por ciento de la cuota del impuesto las transmisiones de terrenos y las transmisiones o constituciones de derechos reales de goce limitativos del dominio realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges o parejas de hecho, cuando se trate de parejas de hecho constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo, y los ascendientes y adoptantes.

IV. Sujetos pasivos

Artículo 6

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

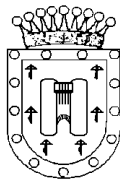
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física y jurídica y la entidad a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de octubre, General Tributaria de Álava, así como la herencia que se halle pendiente del ejercicio de un poder testatorio o del ejercicio de un usufructo poderoso, que adquiera el terreno a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física y jurídica y la entidad a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, así como la herencia que se halle pendiente del ejercicio de un poder testatorio o del ejercicio de un usufructo poderoso, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física y jurídica y la entidad a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, así como la herencia que se halle pendiente del ejercicio de un poder testatorio o del ejercicio de un usufructo poderoso, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España.

3. En las transmisiones como consecuencia de la dación en pago, de la ejecución hipotecaria, judicial o notarial de la vivienda habitual del deudor hipotecario o del garante del mismo a favor de una entidad crédito o de cualquier entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas.

A los efectos de este apartado tendrán la misma consideración cuando la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o del garante del mismo, se



realice con ocasión de la condición de avalista en garantía de las deudas para la adquisición de la vivienda habitual del deudor.

Para que se produzcan los efectos previstos en este apartado se requiere que el deudor o garante transmitente o avalista o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para poder satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito.

A los efectos previstos en este apartado se entenderá por vivienda habitual la definida como tal en el apartado 8 del artículo 87 de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho constituida conforme a lo dispuesto en la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo.

V. Base imponible y cuota

Artículo 7. Base Imponible

1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.

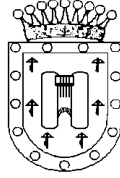
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo y el porcentaje anual que corresponda en función de lo previsto en el artículo 8.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles.

No obstante, el valor de los terrenos correspondientes a inmuebles sujetos al régimen de viviendas de protección pública se calculará aplicando el coeficiente del 0,2 al precio de venta del mismo.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el artículo 8, se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los



referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el artículo 8 se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra a) anterior que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en la letra a) de este apartado 2 fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales una reducción del 50 por ciento.

Dicha reducción se aplicará respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que el mismo se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

Artículo 8. Porcentaje anual a aplicar sobre el valor del terreno

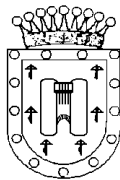
Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en el artículo 7, apartados 2 y 3, se aplicará el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento, sin que el mismo pueda exceder de los límites siguientes:

a) Período de uno hasta cinco años: 2,7.

b) Período de hasta diez años: 2,5.

c) Período de hasta quince años: 2,2.

d) Período de hasta veinte años: 2.



Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:

1º. El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

2º. El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.

3º. Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 1ª y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2ª, sólo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período.

Artículo 9. Cuota Íntegra

La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen, tipo que será el siguiente:

Periodo	Tipo de gravamen
De 1 a 5 años	15 por ciento
Hasta 10 años	15 por ciento
Hasta 15 años	15 por ciento
Hasta 20 años	15 por ciento

Artículo 10. Cuota Líquida

La cuota líquida del Impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, la bonificación a que se refiere el artículo 5.

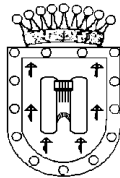
VI. Devengo del impuesto

Artículo 11

1. El impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.



2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.

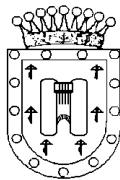
En las herencias que se defieran por poder testatorio, el impuesto se devengará cuando se hubiere hecho uso total del poder o se produzca alguna de las demás causas de extinción del mismo.

5. Si en el poder testatorio se otorgase a favor de persona determinada el derecho a usufructuar los bienes de la herencia sujetos a este impuesto, mientras no se haga uso del poder, se practicará una doble liquidación de ese usufructo: una provisional, con devengo al abrirse la sucesión, por las normas del usufructo vitalicio, y otra con carácter definitivo, al hacerse uso del poder testatorio, con arreglo a las normas del usufructo temporal, por el tiempo transcurrido desde la muerte del causante, y se contará como ingreso a cuenta lo pagado por la provisional, devolviéndose la diferencia al usufructuario si resultase a su favor. Esta liquidación definitiva por usufructo temporal, deberá practicarse al tiempo de realizar la de los herederos, que resulten serlo por el ejercicio del poder testatorio, o por las demás causas de extinción del mismo.

VII. Gestión del impuesto

Artículo 12. Documentación a presentar

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra la declaración correspondiente por el impuesto según el



modelo oficial que se facilitará y que contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación correspondiente.

2. Junto con la declaración, los sujetos pasivos deberán presentar los siguientes documentos:

a. Documento nacional de identidad o número de identificación fiscal de los transmitentes y adquirentes.

b. Copia autenticada del documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición.

c. Certificación de la referencia catastral de los inmuebles que se transmiten.

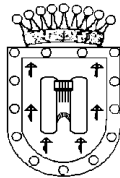
3. Las exenciones o bonificaciones que se soliciten, deberán igualmente justificarse documentalmente.

4. El Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra podrá requerir a las personas interesadas que aporten en el plazo de treinta días, prorrogables por otros quince a petición del/la interesado/a, otros documentos que estime necesarios para llevar a efecto la liquidación del impuesto, incurriendo, quienes no atiendan los requerimientos formulados dentro de tales plazos, en las infracciones y sanciones tributarias correspondientes, en cuanto dichos documentos fueran necesarios para comprobar la declaración.

Si tales documentos sólo constituyen el medio de probar circunstancias alegadas por el interesado en beneficio exclusivo del mismo, el incumplimiento del requerimiento determinará la práctica de la liquidación haciendo caso omiso de las circunstancias alegadas y no justificadas.

5. Siempre que el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra tenga conocimiento de la realización de hechos imposables que no hubiesen sido objeto de declaración, dentro de los plazos señalados en el artículo 13, requerirá a los interesados para que formulen dicha declaración, sin perjuicio de las infracciones tributarias en que se hubiera incurrido y de las sanciones, en su caso, procedentes.

Si cursados por la administración municipal de Peñacerrada-Urizaharra los requerimientos anteriormente previstos, los interesados no presentarán la correspondiente declaración, se instruirá el expediente de oficio, con los datos obrantes en su poder, practicando la liquidación procedente, con indicación, en su caso, de los plazos de ingreso y expresión de los recursos procedentes, sin perjuicio de las infracciones tributarias en que se hubiera incurrido y de las sanciones, en su caso, procedentes.



6. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

- a. En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6 de la presente ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
- b. En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

Artículo 13. Plazos de presentación

La declaración y los documentos a los que se refiere el artículo anterior deberán ser presentados en el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

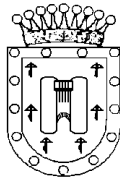
- a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
- b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

1. Los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra, dentro de la primera quincena de cada trimestre natural, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre natural anterior, que en todo caso contendrá el nombre y apellidos, número de documento nacional de identidad y domicilio de las partes intervinientes, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Norma Foral General Tributaria de Álava.

2. En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión.

3. Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones.

Artículo 15. Infracciones y sanciones tributarias



7. Las infracciones tributarias serán calificadas y sancionadas con arreglo en lo dispuesto en la Norma Foral General Tributaria de Álava.

VIII. Disposición adicional

A efectos de lo dispuesto en el artículo 7.2.b), y en tanto permanezca en vigor la Norma Foral aprobatoria del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, deberán observarse las siguientes reglas:

1. a) El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor de los bienes, en razón de 2 por ciento por cada período de un año, sin exceder del 70 por ciento.

1.a) En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 del valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de 20 años, minorando, a medida que aumente la edad en la proporción de un 1 por ciento menos por cada año más, con el límite del 10 por ciento del valor total.

1.b) El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se estableciere por plazo superior a 30 años o por tiempo indeterminado, se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria.

2. El valor del derecho de nuda propiedad se computará por la diferencia entre el usufructo y el valor total de los bienes. En los usufructos vitalicios que, a su vez, sean temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando, de las reglas del número primero anterior, aquélla que le atribuya menos valor.

3. El valor de los derechos reales de uso y habitación será el que resulte de aplicar el 75 por ciento del valor de los bienes sobre los que fueron impuestas las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos.

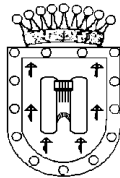
IX. Disposición final

La presente ordenanza fiscal municipal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el BOTA, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

I. Disposiciones generales

Artículo 1. Este ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico y en la Norma Foral 44/1989, de 19 de julio, particular del tributo, exige el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica con



arreglo a la presente ordenanza, de la que es parte integrante el anexo en el que se contiene el cuadro de tarifas aplicables.

Artículo 2. La ordenanza se aplica en todo el término municipal.

II. Hecho imponible

Artículo 3. Constituye el hecho imponible del impuesto:

1. La titularidad de los vehículos de tracción mecánica aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría, cuando el domicilio que conste en el permiso de circulación corresponda a este municipio.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.

3. No están sujetos a este impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.

III. Exenciones y bonificaciones

Artículo 4

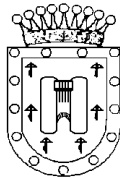
1. Estarán exentos del impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, Diputación Foral de Álava y de entidades municipales, adscritos a la defensa o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales.



d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra a del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, matriculados a nombre de personas con discapacidad.

Asimismo, están exentos los vehículos de menos de 14 caballos fiscales, matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como los destinados a su transporte.

Quedarán también exentos los vehículos cuyos titulares acrediten que tienen a su cargo, por razón de patria potestad, tutela o curatela, a alguna persona con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

Las exenciones previstas en los tres párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con discapacidad las siguientes:

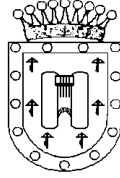
a') Aquellas personas que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento que se encuentren en estado carencial de movilidad reducida, entendiéndose por tales las incluidas en alguna de las situaciones descritas en las letras a, b o c del baremo que figura como anexo III del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración o calificación del grado de minusvalía o que obtengan 7 o más puntos en las letras d, e, f, g o h del citado baremo.

b') Aquellas personas con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento.

A las personas incluidas en las letras a') y b') anteriores que se encuentren en situación carencial de movilidad reducida calificada con la letra a en el baremo que figura como anexo III del mencionado Real Decreto 1971/1999, no les será de aplicación el límite de 14 caballos fiscales, siempre que el vehículo se encuentre adaptado para el uso con silla de ruedas.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria inscritos en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (R.O.M.A.).



2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión, aportando la documentación siguiente:

a) En el supuesto e):

En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo:

* Fotocopia del permiso de circulación.

* Fotocopia compulsada del certificado de la discapacidad y, en su caso, del estado carencial de movilidad reducida emitido por la Diputación Foral de Álava u otro organismo competente no siendo título suficiente el dictamen técnico facultativo emitido por los equipos de valoración correspondientes.

* Fotocopia del permiso de conducir (anverso y reverso).

* Fotocopia compulsada de las características técnicas del vehículo.

* En el supuesto de vehículos destinados al transporte de discapacitados:

o Los exigidos en el punto anterior.

o Justificación documental del destino del vehículo ante el ayuntamiento de la imposición, en los siguientes términos:

.- Declaración del interesado.

.- Certificados de empresa.

.- Tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con movilidad reducida.

.- Cualesquiera otros certificados expedidos por la Autoridad o persona competente.

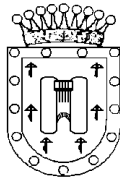
.- Acreditación de la patria potestad, tutela o curatela, si fuera el caso.

b) En el supuesto g):

* Fotocopia compulsada del permiso de circulación.

* Fotocopia compulsada del certificado de características técnicas del vehículo.

* Fotocopia compulsada del documento acreditativo de la inscripción en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo.



No procederá la aplicación de esta exención, cuando por la administración municipal se compruebe que los tractores, remolques o semirremolques de carácter agrícola se dedican al transporte de productos o mercancías de carácter no agrícola o cuando no se estime necesario para explotaciones de dicha naturaleza.

Declarada la exención por la administración municipal de Peñacerrada-Urizaharra, se expedirá un documento que acredite su concesión.

Las exenciones que no se soliciten conjuntamente con el alta del vehículo entrarán en vigor al año siguiente de su concesión.

IV. Sujetos pasivos

Artículo 5.

Son sujetos pasivos de este Impuesto, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación, así como las herencias que se hallen pendientes del ejercicio de un poder testatorio o del ejercicio de un usufructo poderoso siempre que reúnan los requisitos previstos en el artículo 3 de esta Ordenanza Fiscal.

V. Cuota

Artículo 6

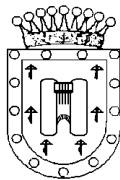
1. El impuesto se exigirá con arreglo al cuadro de tarifas que se contiene en el anexo.
2. Para la determinación de la clase de vehículo se atenderá a lo que reglamentariamente se determine, teniendo en cuenta, además, las siguientes reglas:
 - a) Se entenderá por furgoneta el resultado de adaptar un vehículo de turismo a transporte mixto de personas y cosas mediante la supresión de asientos y cristales, alteración del tamaño o disposición de las puertas u otras alteraciones que no modifiquen esencialmente el modelo del que se deriva.

Las furgonetas tributarán como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los siguientes casos:

Primero. Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve personas, incluido el conductor, tributará como autobús.

Segundo. Si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 kilogramos de carga útil tributará como camión.

b) Los motocarros tendrán la consideración, a los efectos de este impuesto, de motocicletas y, por tanto, tributarán por la capacidad de su cilindrada.



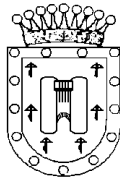
- c) En el caso de los vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separado el que lleve la potencia de arrastre, los remolques y semirremolques arrastrados.
- d) En el caso de los ciclomotores, remolques y semirremolques, que por su capacidad no vengan obligados a ser matriculados, se considerarán como aptos para la circulación desde el momento que se haya expedido la certificación correspondiente por la Delegación de Industria, o en su caso, cuando realmente estén en circulación.
- e) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores.
- f) En todo caso, la rúbrica general de "tractores" a los que se refiere la letra D) de las tarifas, comprende a los tractocamiones y a los "tractores de obras y servicios".
- g) Los vehículos todoterrenos deberán calificarse como turismo y tributarán por su potencia fiscal.
- h) Los vehículos mixtos-adaptables tributarán según el número de plazas autorizadas para este tipo de vehículos:
1. Cuando el número de asientos, excluido el del conductor, no exceda de la mitad de la que conforme a su categoría o estructura pudiera llevar como máximo tributarán como camión por su carga útil.
 2. Cuando el número de asientos, excluido el del conductor, exceda de la mitad de la que, conforme a su categoría o estructura pudiera llevar como máximo, tributarán como turismo por su potencia fiscal.
- i) Los vehículos auto-caravanas o aquellos acondicionados para ser utilizados como vivienda tendrán la consideración de turismo y tributarán por su potencia fiscal.

La potencia fiscal del vehículo expresada en caballos fiscales, se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.20 del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, en relación con el anexo V del mismo texto.

VI. Periodo impositivo y devengo

Artículo 7

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición o baja de los vehículos. En estos casos el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición o terminará el día en que se produzca la baja en la jefatura de tráfico, respectivamente.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.



3. En el caso de primera adquisición de vehículos, el importe de la cuota del impuesto será el que proporcionalmente corresponda al tiempo que medie entre la fecha de adquisición y el 31 de diciembre o, en su caso, la de la baja del vehículo.

4. En el supuesto de baja de vehículos, ya sea temporal o definitiva, el importe de la cuota del impuesto será el que proporcionalmente corresponda al tiempo que medie entre el 1 de enero y la fecha de baja del vehículo en la jefatura de tráfico.

VII. Gestión

Artículo 8. La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.

Artículo 9. El ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación.

Artículo 10. Será instrumento acreditativo del pago del impuesto el recibo expedido por la administración municipal.

Artículo 11. El pago del impuesto se efectuará dentro del segundo trimestre de cada ejercicio, salvo que se trate de los supuestos contemplados en el artículo siguiente, en los que se estará a lo que en él se dispone.

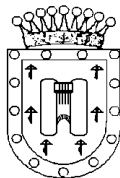
Artículo 12. En caso de nueva matriculación o de modificaciones en el vehículo que altere su clasificación a efectos tributarios, los interesados deberán presentar en el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra, con objeto de su inclusión en la matrícula del impuesto, dentro del plazo de 30 días hábiles desde la matriculación o modificación los siguientes documentos:

- a) Permiso de circulación.
- b) Certificado de características técnicas.
- c) DNI o CIF.

Artículo 13

1. Quienes soliciten ante la jefatura de tráfico la matriculación, la certificación de aptitud para circular, deberán acreditar, previamente, el pago del impuesto.

2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la jefatura de tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este impuesto, así como también en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente ante la referida jefatura de tráfico el pago del último recibo presentado al cobro del impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el



pago de todas las deudas por dicho concepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas.

Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.

3. Las jefaturas de tráfico no tramitarán los expedientes de baja o transferencia de vehículos si no se acredita previamente el pago del impuesto.

Disposición transitoria

Los vehículos que con anterioridad a la entrada en vigor de la Norma Foral 12/2003, de 31 de marzo de modificación de las Haciendas Locales, resultando exentos del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica por aplicación de la anterior redacción del artículo 2.1.d) de la Norma Foral 44/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, no cumplan los requisitos fijados para la exención en la nueva redacción dada por esta Norma Foral a dicho precepto, continuarán teniendo derecho a la aplicación de la exención prevista en la redacción anterior del citado precepto, en tanto el vehículo mantenga los requisitos fijados en la misma para tal exención.

Disposición final

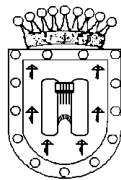
La presente ordenanza ordenanza fiscal municipal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el BOTA, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación expresas.

Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

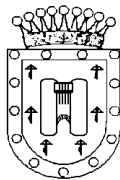
Anexo

Tarifa

Potencia y clase de vehículo	Cuota/euros
A) Turismos:	
De menos de 8 caballos fiscales	14,57
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales	39,36
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales	83,10
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales	103,50
De 20 caballos fiscales en adelante	129,37
B) Autobuses:	



De menos de 21 plazas	96,21
De 21 a 50 plazas	137,03
De más de 50 plazas	171,29
C) Camiones:	
De menos de 1.000 kg. de carga útil	48,84
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil	96,21
De más de 2.999 a 9.999 kg. de carga útil	137,03
De más de 9.999 kg. de carga útil	171,29
D) Tractores:	
De menos de 16 caballos fiscales	20,41
De 16 a 25 caballos fiscales	32,07
De más de 25 caballos fiscales	96,21
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:	
De menos de 1.000 kg. de carga útil y más de 750 kg. de carga útil	20,41
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil	32,07
De más de 2.999 kg. de carga útil	96,21
F) Otros vehículos:	
Ciclomotores	5,10
Motocicletas hasta 125 c.c.	5,10
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c.	8,75
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c.	17,49
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.	34,99
Motocicletas de más de 1.000 c.c.	69,97



ANEXO II

CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS Y DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ENTRE LA DIPUTACIÓN FORAL Y EL AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA-URIZAHARRA,

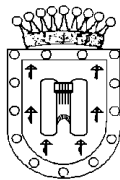
La Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales del País Vasco, pilar del Estado de Bienestar, regula la obligación de los poderes públicos de garantizar a todas las personas titulares del derecho la disponibilidad y el acceso a las prestaciones y servicios sociales en los términos fijados en la misma y en el Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, según el Mapa de Servicios Sociales del Territorio Histórico de Álava, ratificado el 22 de julio de 2016 por la Diputación Foral de Álava y los Ayuntamientos del Territorio Histórico en el marco del Plan Estratégico de Servicios Sociales.

Según el art. 22 de la ley el Servicio de Ayuda a Domicilio es una competencia municipal que incluye una amplia atribución de facultades y funciones de muy difícil ejecución en la mayoría de los municipios del Territorio Histórico que, por su reducido tamaño y población, no están dotados de las infraestructuras necesarias para la prestación efectiva de dicho servicio, lo que pudiera implicar además que la intensidad y calidad del servicio de ayuda a domicilio no fuera similar en todo el Territorio Histórico.

Como señala el art. 31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Diputaciones deben asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio de los servicios de competencia municipal, y conforme al art. 36 del mismo texto las Diputaciones tienen, entre otras, la función de asistir y cooperar jurídica, económica y técnicamente en lo que a los servicios municipales se refiere. Lo anterior unido a una mayor eficiencia en la gestión de los recursos aconseja la participación de la Diputación Foral de Álava en la prestación de dicho servicio de competencia municipal, dando así continuidad a la situación actual en la que dicho servicio ha venido prestándose por la Diputación Foral de Álava.

Por ello, a fin de integrar las carencias municipales en infraestructuras, de arbitrar mecanismos para garantizar la efectividad del servicio en todo el Territorio y de conseguir que la ciudadanía del Territorio sea receptora de ese servicio social en igual intensidad y calidad con una ejecución y gestión eficaz y óptima de los recursos económicos, es conveniente instrumentar un marco de colaboración entre la Diputación Foral de Álava y los Ayuntamientos que así lo decidan para el ejercicio de determinadas funciones de competencia municipal y para la prestación integral del servicio.

Dicha colaboración tiene su encaje legal en los principios de colaboración, cooperación y asistencia interadministrativa recogidos, entre otros, en los arts. 140 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; y en el



art. 43 y ss. de la referida Ley de Servicios Sociales materializados en el presente Convenio.

La distinta naturaleza de las funciones municipales en relación con el servicio social de ayuda a domicilio hace necesario que este Convenio, formalizado al amparo de lo previsto en los arts. 47 y ss. de la Ley 40/2015 antes mencionada, incluya dos fórmulas colaborativas: 1) la delegación de competencias para el ejercicio de las funciones relativas a la tramitación y desarrollo de los procedimientos administrativos relacionados con la prestación social y también con la recaudación del precio público y, 2) la encomienda de gestión de aquellas otras funciones que constituyen la prestación del servicio propiamente dicho. Ambas fórmulas participativas se recogen en un único Convenio con la finalidad de que su eficacia, validez y vigencia queden entre sí vinculadas.

Dado que uno de los fundamentos de la colaboración foral es promover que la calidad e intensidad del servicio sea semejante en todos los municipios alaveses es preciso que la normativa reguladora del servicio y la de sus precios públicos sea la misma para los Ayuntamientos que suscriban el convenio facilitándose además con ello el ejercicio de la delegación de competencias, razón por la que la reglamentación reguladora del servicio, y de su precio público se incluye como anexos al Convenio.

El presente convenio es de aplicación a los municipios del Territorio Histórico que se adhieran al mismo, en los términos señalados en las siguientes

CLÁUSULAS

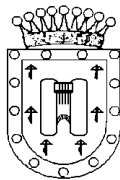
Primera. Objeto

1.1. Es objeto del presente Convenio la delegación en la Diputación Foral de Álava de las competencias del Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra en materia del servicio de ayuda a domicilio y la encomienda de gestión a la Diputación Foral de Álava de la prestación integral de dicho servicio.

1.2 Quedan excluidas del Convenio todas las funciones y competencias municipales sobre información, valoración, diagnóstico y orientación del servicio de ayuda a domicilio que, por corresponder a los servicios sociales de base, serán prestados directamente por el propio municipio y/o Cuadrilla.

Segunda. Normativa reguladora del Servicio y eficacia del Convenio.

2.1 La Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra se comprometen a la firma del presente Convenio dentro del plazo de un mes desde la aprobación del Reglamento Municipal Regulador de este servicio de Ayuda a Domicilio y de la Ordenanza Fiscal correspondiente, que se adjuntan a este convenio como Anexos I y II respectivamente.



2.2 La aprobación y vigencia de dicha normativa es requisito imprescindible para la eficacia y vigencia del presente Convenio. Si el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra decidiera establecer exenciones o bonificaciones al precio público diferentes a las previstas en la Ordenanza Fiscal (anexo II de este convenio), serán a su cargo los importes correspondientes.

Tercera. Alcance de la delegación de competencias.

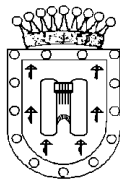
3.1 El Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra delega en la Diputación Foral de Álava el ejercicio de las siguientes competencias en materia de servicio de ayuda a domicilio:

- a) Tramitar desde la propuesta de resolución (realizada por los servicios sociales municipales) hasta su total terminación los procedimientos administrativos relacionados con la prestación de dicho servicio, adoptando al efecto cuantas resoluciones sean precisas y, en particular, las de reconocimiento, acceso, suspensión y/o extinción del derecho a dicha prestación en los términos establecidos en el Reglamento Municipal Regulator del Servicio de Ayuda a Domicilio.
- b) Dictar las instrucciones y criterios de aplicación necesarios para una correcta prestación del servicio tal y como se establece en el Reglamento Municipal Regulator del Servicio de Ayuda a Domicilio.
- c) La gestión, liquidación, inspección y recaudación de los precios públicos por la prestación del servicio que se establecen en la Ordenanza Fiscal, de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora de las Haciendas Locales y supletoriamente por la Norma Foral General Tributaria de Álava.
- d) Ejercer la potestad sancionadora en la materia del servicio de ayuda a domicilio y realizar las inspecciones y comprobaciones que legalmente procedan.
- e) Resolver los recursos administrativos interpuestos contra los actos dictados en ejercicio de las competencias delegadas.

3.2 Corresponde a la Diputación Foral de Álava el ejercicio de dicha competencia por delegación, de conformidad con la normativa vigente y, en especial, con la normativa reguladora del servicio y de su precio citada en la cláusula segunda.

Cuarta. Alcance de la encomienda de gestión de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

4.1 El Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra encomienda a la Diputación Foral de Álava, que acepta, la prestación integral del servicio de ayuda a domicilio.



4.2 Dicha encomienda de gestión, y, en su caso, otras prestaciones accesorias, podrá llevarse a cabo por la Diputación Foral de Álava de forma directa o indirecta, mediante su contratación en forma legalmente establecida y cuya duración máxima no superará la vigencia del presente convenio.

Quinta. Comisión de Gobierno y Coordinación.

5.1 Para el seguimiento, control, e impulso del cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el presente Convenio y su interpretación se crea la Comisión de Gobierno y Coordinación.

La Comisión de Gobierno y Coordinación estará formada por:

Seis (6) representantes de los Ayuntamientos, dos por cada una de las áreas de Ayala, Álava Nordeste y Álava Sur.

Tres (3) representantes del Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava.

5.2 Corresponde a la Comisión de Gobierno y Coordinación elaborar su propio reglamento de organización y funcionamiento

5.3 En lo no previsto en el presente convenio y en su reglamento de organización y funcionamiento, el funcionamiento de la Comisión de Gobierno y Coordinación se regirá por las normas de funcionamiento de órganos colegiados establecidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

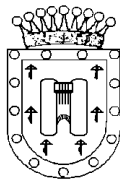
Sexta. Funciones de la Comisión de Gobierno y Coordinación

6.1 Son funciones de la Comisión de Gobierno y Coordinación:

- a. La planificación, coordinación, seguimiento, control, informe e interpretación del presente convenio.
- b. Informar de cualquier modificación o novación del presente convenio.
- c. Ejercer las atribuciones que específicamente están recogidas en el presente Convenio.

6.2 La Comisión de Gobierno y Coordinación será informada anualmente:

- a. Del estado de ejecución del convenio, así como de los incidentes advertidos en cada ejercicio.



- b.** De los contratos a suscribir por la Diputación Foral de Álava cuando superen la cuantía de 600.000.-€
- c.** De las propuestas, quejas o sugerencias que puedan formularles las entidades firmantes.

6.3 Anualmente se presentará a la Mesa Interinstitucional de Servicios Sociales de Álava la memoria de actividad del Servicio de Ayuda a Domicilio del Territorio Histórico de Álava en el marco de los Convenios suscritos con los Ayuntamientos de ese Territorio para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Séptima. Ejercicio de las competencias delegadas y de la encomienda de gestión

7.1 La delegación de las competencias no supondrá la cesión de su titularidad que, en todo momento, seguirá siendo municipal delegándose únicamente su ejercicio.

7.2 La Diputación Foral de Álava informará a la Comisión de Gobierno y Coordinación sobre el ejercicio de las competencias delegadas y sobre el desarrollo del servicio encomendado al menos una vez al año.

7.3 El Ayuntamiento de...podrá solicitar en cualquier momento información sobre el ejercicio por la Diputación Foral de Álava de las competencias delegadas y la prestación del servicio mediante escrito dirigido a la Diputada Foral del departamento de Servicios Sociales de La Diputación Foral de Álava. La Diputación Foral de Álava remitirá la información solicitada en el plazo máximo de veinte días hábiles desde la fecha de registro de entrada en la Diputación Foral de Álava de la solicitud.

Octava. Régimen económico-financiero.

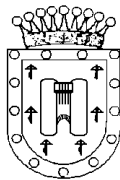
En todo caso se garantizará el gasto público corriente por usuario actual como cantidad a financiar por la Diputación Foral de Álava.

Novena. Régimen jurídico

El presente convenio tendrá naturaleza administrativa. Su revisión en vía judicial, así como la de los actos y acuerdos dictados en su ejecución o derivados de este, les corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Décima. Duración

10.1 El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde su eficacia según lo previsto en la cláusula segunda en relación con la decimocuarta. Una vez finalizado el citado plazo se podrá prorrogar por igual período de tiempo.



10.2 Se entenderá que el Convenio queda automáticamente prorrogado si ninguna de las partes denuncia su intención de no prorrogarlo con al menos seis meses de antelación a su finalización.

10.3 El hecho de que un Ayuntamiento, por los motivos que fueren, decidiera no prorrogar el presente convenio, no implicaría la resolución del mismo por parte del resto de Ayuntamientos de su zona básica.

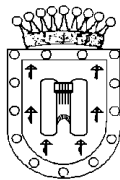
Undécima. Causas de resolución del convenio.

11.1 El Convenio podrá resolverse por:

- a. Mutuo acuerdo entre las partes.
- b. Denuncia de cualquiera de las partes formalizada con al menos con seis meses de antelación a la fecha en que deba tener efectos.
- c. Desacuerdo en el órgano de la Comisión de Gobierno y Coordinación sobre la interpretación de las cláusulas esenciales de este convenio.
- d. Incumplimiento de deberes convencionales esenciales. Para la aplicación de esta causa de resolución, la entidad interesada en resolver el convenio pondrá previamente en conocimiento de la Comisión de Gobierno y Coordinación la existencia de dicha causa de resolución, y su intención de resolverlo. Una vez realizada esta comunicación se procederá a convocar a la comisión, que deberá reunirse en un plazo máximo de quince días hábiles, con el fin de, previa audiencia de la otra parte, emitir informe sobre el origen de la resolución. Emitido el informe de la comisión, la entidad interesada adoptará la resolución que proceda.
- e. Imposibilidad sobrevenida de su cumplimiento, considerándose como tal, entre otras, la aprobación o modificación por el Ayuntamiento de una normativa relativa al Servicio de Ayuda a Domicilio distinta a la previamente acordada, en los términos y con las excepciones establecidas en la cláusula segunda de este convenio.
- f. El transcurso de su plazo máximo de vigencia y de su prórroga.

11.2 Resuelto o extinguido el convenio se iniciará su liquidación que, previa audiencia del Ayuntamiento afectado, se formulará por la Diputación Foral de Álava y será aprobada por la Comisión de Gobierno y Coordinación.

11.3 La resolución unilateral del Convenio por el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra basado en el incumplimiento por parte de la Diputación Foral de Álava obligará a la Diputación Foral de Álava a asumir la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios que pudiera generar.



11.4 La resolución del presente Convenio obligará al Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra a asumir las obligaciones y compromisos adquiridos por la Diputación Foral de Álava con ocasión de la prestación directa y/o indirecta del servicio, o en su caso, a satisfacer la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios.

Duodécima. Protección de Datos.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra es el titular del fichero de usuarios/as y del tratamiento de los datos de carácter personal de los usuarios/as. Por ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter Personal, los datos que se faciliten a la Diputación Foral de Álava, en su condición de encargada del tratamiento, para identificar a los usuarios/as y realizar las actividades previstas en este Convenio, sólo los utilizará durante el tiempo de vigencia para cumplir las obligaciones asumidas. La Diputación Foral de Álava no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figura en el convenio. Igualmente, se obliga a: Observar y adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos a los que tenga acceso, y en especial, las medidas de seguridad que para el nivel básico se establecen en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/99 (Art. 79 a 94, ambos incluidos) y a devolver al Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra, una vez que se extinga el convenio, todos los soportes con datos personales a los que haya tenido acceso para realizar la actividad.

Decimotercera. Procedimiento de adhesión al convenio

La suscripción del presente Convenio requerirá el Acuerdo del Pleno respectivo en el que se apruebe dicha suscripción, con la aceptación expresa de la totalidad de sus cláusulas y de la previa aprobación de la normativa prevista en la cláusula segunda de este Convenio.

Decimocuarta. Publicación.

Una vez aprobado por los órganos competentes de cada una de las Administraciones intervinientes, este Convenio se publicará en el BOTHA, entrando en vigor a partir del día siguiente a la mencionada publicación.